

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA
ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



NATALIA DIAZ ZAMBRANO

Cédula No. 1.129.515.391

CAROLINA LEON QUINTERO

Cédula No. 22.650.285

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Programa de Derecho
Universidad de la Costa –CUC
Barranquilla, 2020

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



NATALIA DIAZ ZAMBRANO

Cédula No. 1.129.515.391

CAROLINA LEON QUINTERO

Cédula No. 22.650.285

Proyecto realizado para optar al título de Abogado

Asesor

Dr. Carlos Alberto Jiménez cabarcas

CENTRO DE INVESTIGACIONES
DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Programa de Derecho
Universidad de la Costa –CUC
Barranquilla, 2020

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Resumen

La inasistencia alimentaria es un delito relevante jurídicamente, que busca proteger el derecho de aquellos que se consideren beneficiarios como un derecho fundamental. Es propicia la intervención del derecho penal para el Estado Colombiano, con relación a efectivizar el real amparo a la familia en el orden jurídico del tipo penal vigente hacia la manutención en la obligatoriedad alimentaria. Mediante el estudio realizado, se analizan los artículos especializados, jurisprudencia y la normatividad, enmarcado en escenarios jurídicos competentes y las leyes correspondientes.

Palabras clave: familia, inasistencia alimentaria, derecho penal, leyes.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Abstract

Non-food assistance is a legally relevant crime, which seeks to protect the right of those who consider themselves beneficiaries as a fundamental right. It is conducive to the intervention of criminal law for the Colombian State, in relation to making effective the real protection of the family in the legal order of the current criminal type towards maintenance in the mandatory food. Through the study carried out, specialized articles, jurisprudence and regulations are analyzed, framed in competent legal scenarios and the corresponding laws.

Keywords: family, non-food assistance, criminal law, laws.

CONTENIDO

INTRODUCCION	7
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	8
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	11
OBJETIVOS	11
GENERAL	11
ESPECIFICOS	11
JUSTIFICACIÓN	12
DELIMITACIÓN	13
MARCO REFERENCIAL.....	13
ANTECEDENTES.....	13
MARCO TEÒRICO.....	21
FAMILIA	21
OBLIGACION ALIMENTARIA	31
EL TIPO PENAL	36
MARCO LEGAL.....	47
METODOLOGIA	53
METODO Y PROCESO.....	54
DESARROLLO DEL PROCESO ANALITICO	55

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA	6
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN	64
CONCLUSIONES	74
BIBLIOGRAFÍA	76

Introduccion

Los delitos de inasistencia alimentaria en Colombia, son descritos en el artículo 233 de la ley 599 del 2000 e igualmente en el actual Código Penal Colombiano, título VI delitos contra la familia artículo 233, que prevé que incurrirá en dicha conducta quien se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos, cónyuge o compañero o compañera permanente, y fija prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Código Penal, Título VI, Art. 233).

Es una tipo especial con sujeto activo calificado. Para analizarlo se tiene que acudir a la legislación civil, que desarrolla ampliamente quiénes son los grados de parentesco que establece la ley y cuáles son los alimentos debidos alimentos congruos y necesarios. Por lo tanto, se halla incurso en este delito la persona que se sustraiga sin justa causa, ya sea por parte del padre o la madre, hijos, cónyuge o compañeros permanentes, en suministrar los alimentos debidos, quienes en muchos casos para evadir esa obligación se alejan de la familia, bien sea para vivir solos, o conformar otra unión, para desconocer su obligatoriedad, sumado a que en ocasiones recurren a estrategias de insolvencia para no cubrir la cuota alimentaria.

Este estudio pretende analizar la eficacia de la aplicación del tipo penal de la inasistencia alimentaria en Barranquilla, teniendo en cuenta que la inasistencia alimentaria

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

es una problemática social que se ha incrementado a través de los años y del cual se desprenden elementos diversos por los cuales atraviesan los integrantes del núcleo familiar, tales como: el desempleo, el desplazamiento, la marginación, la falta de oportunidades laborales, la desintegración familiar y la falta de conocimiento del común de la gente sobre la normatividad existente frente al respeto a los derechos y obligaciones que se generan de los lazos consanguíneos y de afinidad de los demás grados mencionados en la legislación que regula esta conducta.

Planteamiento del problema

La pena es, en su sentido amplio, un mal que se tiene que soportar porque a su vez se creó un mal. Lo que es cierto, es que mediante la pena se causa un mal como reacción a la lesión de una regla jurídica. El punto de vista jurídico-penal es pues, primeramente como el civil y a diferencia del derecho de orden público es, como se podría decir un punto de vista retrospectivo y no prospectivo, sino la reconciliación del delincuente consigo mismo, con el ordenamiento quebrantado, en definitiva, con la comunidad.

La teoría de la pena de Hegel (1970), ha demostrado ser pues una concepción ciertamente moderna. Solamente hay que liberarla del idealismo que va asociado a ella, de la creencia por lo tanto, de que el Estado y el Derecho son *absolutamente racional* (hoy en día se definiría más bien el derecho como un intento de alcanzar una convivencia racional). La pena es legal solo mediante la legitimidad del orden mismo para cuyo sostenimiento se impone. Hegel, propuso esta legitimidad con la equiparación de razón y orden. Tras la caída de la filosofía idealista y de todas las concepciones del derecho natural, deberíamos

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

hablar hoy de una legitimación de la pena tal y como ha sido desarrollada el sociólogo alemán, recientemente fallecido, Niklas Luhmann, en su conocida obra *Legitimation durch Verfahren*, legitimación por medio del procedimiento, pero esto no pertenece a la materia de este estudio. Si hay equivalentes funcionales para la pena como *lesión de la lesión* de Hegel, la pena no sería necesaria pues, si bien es cierto que la pena, según el concepto, es absoluta, también es que en su conformación concreta es relativa según el estado correspondiente de la sociedad que ya fue conocido por Hegel, al menos, en parte.

Por otra parte, siguiendo a Hegel (1970), es un derecho penal la culpabilidad. Pero puede que las circunstancias sean de tal modo que el referido derecho penal cívico de la culpabilidad se encuentre en situaciones límite en las que la función de seguridad del Estado ocupe un primer plano. El Derecho penal funciona en el sentido hegeliano descrito en una sociedad que en líneas generales se encuentre intacta, con un orden relativamente estable.

El Estado colombiano buscando vías de solución frente a dicha problemática, se expide las Leyes 1181 y 1142 del 2007, 1453 del 2011 y por último la Ley 1542 del 5 de julio del 2012, con las cuales el legislador aumentó las penas y cambió de cuasi-delito a oficioso, los delitos de violencia intrafamiliar y de inasistencia alimentaria; buscando que los procesos que se inicien lleguen a un término. Es decir, se agote todo el juicio y se profiera sentencia, modificándose lo concerniente a la aplicación de los medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, situación que se venía presentando en el medio jurídico.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

El problema principal es que en la práctica, se traduce que el delito de inasistencia alimentaria se convirtió en un problema social y la presión sobre el agresor no es suficiente para evitar que se sigan vulnerando los derechos de quienes en condición de víctima acuden a la administración de justicia.

Actualmente la posibilidad de despenalizar la inasistencia alimentaria tiene en expectativa a muchos colombianos. Este es un delito que toca las fibras más sensibles de la sociedad, pues busca que miles de padres se responsabilicen por el mantenimiento económico de sus hijos e igualmente de padres que no son cuidados por sus hijos en la etapa de su ancianidad.

Sin embargo, el gran número de procesos que actualmente adelanta la justicia por cuenta de esta conducta ha llevado a los expertos a plantear que quizás el derecho penal no es la mejor forma de abordar ese problema. Entre otras cosas, porque privar de la libertad a un papá que no paga el dinero de la cuota de su hijo puede castigarlo, pero no se traduce tampoco en que el niño, con un papá preso, sí reciba lo necesario para vivir. En este momento, el delito cuando es cometido contra menores de edad tiene una pena de 32 a 72 meses.

La despenalización de la inasistencia alimentaria, que tiene el aval del prestigioso Consejo de Política Criminal sería uno de los puntos estructurales de una posible reforma penitenciaria. Este punto será uno de los debates más álgidos que enfrentará la propuesta presentada por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, que busca la descongestión del sistema penitenciario en el país.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

En la legislación penal colombiana ya es un tipo penal la inasistencia alimentaria, el principal obstáculo es desde la óptica del derecho constitucional que alega esta situación de no pago de alimentos congruos y necesarios como una conducta en la esfera civil y no como un delito de tipo penal, la sociedad organizada es sensitiva frente a este hecho y requiere que se enfoque en la protección y sanción respectivamente, en el derecho punitivo. Finalmente, la gran disyuntiva es la falta de claridad y ejecución hacia la parte civil, aunque emerge del mismo una conducta punible.

Formulación del problema

¿Cuál es la eficacia de la aplicación del tipo penal de la inasistencia alimentaria en la Ciudad de Barranquilla?

Objetivos

GENERAL

Analizar la eficacia de la aplicación del tipo penal de la inasistencia alimentaria en Barranquilla.

ESPECIFICOS

1. Identificar el tipo penal de inasistencia alimentaria en Barranquilla respecto a los delitos contra la familia.
2. Indicar los fines de la pena y el cumplimiento de la aplicación de penas, en el tipo penal de inasistencia alimentaria.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

3. Interpretación bibliográfica sobre la importancia de la aplicación del derecho penal en la inasistencia alimentaria

Justificación

La realidad sociocultural, acarrea que especialmente los hombres y mujeres no sean conscientes de la relevancia de las obligaciones que tienen frente a sus familiares, al igual que los preceptos tradicionales inmersos en principios y valores referentes de los jueces y fiscales podrían concebirse en la determinación de exigir que se cumpla el pago de alimentos a sus destinatarios establecidos en la ley, por esta razón el género femenino en la mayoría de los casos se convierte en un factor de manipulación por parte de ellas y de los hijos en la ancianidad de sus padres; todo lo anterior evidencia los factores externos que influyen sobre la ineficacia del aparato de justicia en lo penal como en lo civil, revelando la necesidad de desplegar programas dirigidos a promover el cambio cultural, siendo esta responsabilidad de corte común al estado colombiano, quien tiene la responsabilidad centralizada y descentralizada de administrar la justicia.

En esta investigación, se pretende analizar la aplicación de la pena carcelaria como sanción por el incumplimiento de la responsabilidad legal de asistir alimentos, porque que este tipo de pena, es un impedimento para la materialización efectiva de los derechos de aquellos que requieren asistencia alimentaria, para realizar la denuncia de ésta conducta se acude ante el ente judicial, con el fin de que su derecho o bien jurídico tutelado sea protegido, pero al recluir al sujeto activo, en un centro carcelario, la expectativa del aval en la reparación del derecho o de su aseguramiento preventivo se complica aun más con este

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

tipo de sanción, donde se priva al individuo de su libertad, por lo cual los administradores de justicia son los que deben aplicar la reparación entre derecho-sociedad.

El derecho penal busca la protección de los derechos del bien jurídico que es la familia, por lo tanto, cuando se analizan los tipos penales siempre hace injerencia de que la inasistencia alimentaria atenta contra la armonía y estabilidad de la familia, la sociedad y el derecho.

Delimitación

Espacial. Los juzgados municipales penales de barranquilla de acuerdo al numeral 4 del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), son el escenario donde se enmarcara este estudio, pero de acuerdo a la Emergencia Nacional declarada desde el mes de marzo del 2020, solo será revisado de forma bibliográfica por efecto de cuarentena nacional de las instituciones publicas y privadas del país.

Temporal. Se revisará la jurisprudencia y bibliografía existente que se tenga lugar por efectos de Emergencia Nacional.

Marco referencial

ANTECEDENTES

En Colombia el delito de inasistencia alimentaria es una conducta que ha tenido un alto índice de denuncias en las instancias judiciales. Este delito afecta de manera particular y notoria a los menores de edad y la estabilidad de sus hogares, violando sus derechos

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

fundamentales, La influencia que adquiere este delito influyen en las esferas sociales, económicas e incluso culturales, por lo que los administradores de justicia procuran establecer posibles soluciones a través de normas civiles y penales para hacer cumplir a los implicados (Torres, 2011).

La situación situación reincidente en Colombia es preocupante, porque para la administración de justicia solo la norma puede resolver situaciones reincidentes en este delito, es por esto que se planteó la conciliación como un mecanismo de protección del bien jurídico con el fin que puedan emerger los derechos de niños y adolescentes, tratando de evitar penas de carcelación a quienes les corresponda asumir esta obligación. Sin embargo, se encuentra evidencia que en estas audiencias muchos de los implicados no actúan de forma responsable y comprometida con los acuerdos pactados, y su reiterativo incumplimiento desdibuja la figura civil en estos casos.

A pesar de las campañas de concientización sobre la importancia de fortalecer los derechos de los niños y adolescentes, como el cuidado de la familia la reincidencia y el incumplimiento siguen siendo un denominador común, el cual marca un vacío que conlleva a investigar como es la eficacia del tipo penal en cuanto a la inasistencia alimentaria.

La obligación alimentaria y el derecho a reclamarlos, está presente desde cincuenta años atrás, no es una problemática nueva para las culturas del mundo, es un conflicto que viene de lo ancestral. La separación de la falta moral y económica se dio en Colombia desde el año de 1968, con la expedición de la Ley 75, con el fin de que abarcara solo la obligación del pago económico, dejando de lado la esfera, ética o moral.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Aunque la regulación de la inasistencia alimentaria como delito civil indemnizatorio y recientemente esta incluida en el derecho penal, ajustándose dentro de esquemas de tal naturaleza, su origen se conoce en los compendios de tradición babilónica y persa (Torres, 2011).

El estado colombiano, establece las disposiciones del Código Civil colombiano que regulan la obligación alimentaria, tomadas del derecho romano clásico. La protección de la familia como centro de la sociedad, así como la responsabilidad de esta, se encuentra reconocida en varios artículos de la Constitución Política: Adicionalmente, las disposiciones constitucionales y legales que establecen la responsabilidad de los padres respecto de los hijos (Constitución Política, art.42), el deber de solidaridad familiar (Constitución Política, art.42), y los derechos fundamentales de los menores (Constitución Política, art.44), permiten que la sociedad albergue, con justicia, la expectativa de que quienes han decidido optar por la maternidad o la paternidad, estén dispuestos a hacer lo posible para mejorar sus condiciones de vida, y así dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas con sus hijos. En las circunstancias antes descritas, se entiende como resultado razonable que el legislador presuma que los padres devengan, al menos, el salario mínimo legal.

El Código Civil Colombiano (Ley 57 de 1887) estipuló, desde el comienzo de su vigencia en el artículo 411, de acuerdo a Pabón, 2003 que las personas a las que se debe alimentos son: el cónyuge; los descendientes; los ascendientes; a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpo sin su culpa; a los hijos naturales, su

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

posteridad y a los nietos naturales; a los ascendientes naturales; a los hijos adoptivos; incluyendo los padres que no tengan como mantenerse por sí mismos (p.320).

Existen investigaciones sobre *La protección del derecho alimentario en Colombia*, como la realizada por Restrepo, 2011; donde se exponen y analizan el desarrollo de las políticas públicas que sobre alimentación y nutrición ha formulado el estado colombiano. Para el análisis del derecho alimentario se tuvieron en cuenta dos posiciones básicas: la primera es aquella en la cual el titular tiene la capacidad para exigir del destinatario la situación de estar protegido en sus necesidades básicas alimenticias y de forma adecuada en cuanto a nutrición se refiere. En este sentido, se hace referencia a la tesis de la dualidad interpretativa de como la posibilidad de diferenciar en el derecho alimentario, en general, las dos posiciones mencionadas. Este criterio analítico ayudará a evaluar con más claridad los alcances de las políticas públicas o si bien los diseñadores de las mismas las han aplicado satisfactoriamente. El método utilizado como fuente de investigación bibliográfica fue mixto para poder acercarse al régimen de manejo público para poder entender el derecho a los alimentos (Restrepo, 2011).

Según este enfoque, para erradicar el hambre y la desnutrición se han articulado en torno a una doble vía de actuación las políticas de Estado: la *vía de emergencia* y la *vía de estructura*, que se dirigen a diferentes grupos objeto de protección, especificando actividades y metas concretas desde los planes nacionales de nutrición (FAO, CEPAL & PMA, s. f.). Esta división, para efectos de este análisis, se corresponde con los elementos que componen la tesis de la dualidad interpretativa. Es así que el derecho a estar libre de hambre se desarrolla en las políticas públicas a través de la vía de la emergencia, mientras

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

que el derecho a una alimentación adecuada se desarrolla en las políticas públicas a través de la vía estructural. Salvo la última política pública (CONPES, 2008) ninguna ha establecido claramente la diferenciación entre el derecho a estar libre de hambre y el derecho a una alimentación adecuada.

Cuando se habla de las emergencias dentro del derecho internacional el objetivo común es asegurar a través de estos protocolos las formas estratégicas de subsanar o solucionar, de que manera puede concretarse de forma física la entrega de alimentos para la problemática de hambruna y la desnutrición. Para ello, de acuerdo a FAO, CEPAL & PMA, s. f.; el Gobierno trata de asegurar el acceso inmediato a los alimentos para proteger la vida del que está privado de estos; en otras palabras, *es el reconocimiento de que los hambrientos no pueden esperar (p.25)*. Para los objetivos del milenio establecidos por las organizaciones internacionales, conformadas internamente por las Naciones Unidas, es considerado como el primero de los derechos a los cuales tienen los niños y las personas en general sobre todo en los países del tercer mundo, donde hay pobreza y extrema pobreza, por lo cual el estado Colombiano en sus políticas públicas y planes de desarrollo territoriales establece métodos y estrategias para atender las necesidades básicas insatisfechas, y asegurar el derecho a la alimentación en situaciones extremas y vulnerables.

Este conjunto de reglamentaciones y de políticas públicas se concentra en el aparato estatal, a través de programas instaurados internamente incluso algunos dependen de la presidencia de la república y el ministerio de educación social, del cual se desprenden

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

programas a nivel nacional tales como: familias en acción, jóvenes en acción, programas de alimentos para niños y adolescentes entre otros.

De otro lado, la vía de la estructura tiene lugar cuando los Estados, a través de sus políticas públicas, buscan crear y fortalecer las instituciones que pretenden mejorar los estándares de alimentación respecto a la dignidad, diversidad y seguridad de los alimentos y que, a largo plazo, acaben con la malnutrición y el hambre (Restrepo, 2009). Las acciones propias de esta vía buscan el crecimiento económico de las áreas rurales, la conexión de estas con las zonas urbanas, y tratan de establecer un vínculo entre productividad y atención a carencias básicas de la población (FAO, CEPAL & PMA, s.f.).

El origen de la discusión en Colombia contra el hambre y la desnutrición no tuvo un origen autónomo, sino que dependió de iniciativas internacionales y estuvo supeditado a otras inquietudes más generales de salubridad y de estrategias higienistas en el control de la población. No obstante, la ayuda internacional en alimentación y nutrición fomentó en el país el nacimiento de las políticas administrativas de acuerdo a Restrepo-Yepes, 2011; que trataban de abordar el problema, y mostraron que era conveniente y posible intervenir de manera tanto inmediata como a largo plazo, en soluciones de fondo para los problemas sociales de esta materia.

La protección a los derechos de alimentación y nutrición, con mayor apoyo internacional o nacional, se ha desplazado a lo largo de un espectro que va desde las estrategias de intervención en la vía de la emergencia (suministros, subsidios, compensaciones, etc.), hasta las actuaciones institucionales en la vía de la estructura

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

(creación de organismos, políticas de abastecimiento, fomento de la producción, programas educativos, etc.), en un amplio campo de acciones y de estrategias que muestran, especialmente al investigador jurídico, la compleja estructuración de elementos y factores que se han de dar en las políticas públicas para la satisfacción de derechos fundamentales básicos, como lo es el alimentario. No siempre los gobiernos de turno realizaron esfuerzos significativos en la continuación y ampliación de las políticas públicas anteriores sobre alimentación y nutrición, aunque, llamativamente, se logró la ampliación de protección mediante subsidios, a los trabajadores de menores y medianos ingresos, a través de las Cajas de Compensación Familiar.

Así mismo, se logró aumentar, tanto la disponibilidad de alimentos, como el acceso a los mismos por ciertos grupos vulnerables de la población, como fue en el caso de los desplazados, se pudo constatar cómo, a partir de la quinta etapa, las políticas públicas presuponen, por primera vez, una evaluación de los otros planes con el fin de crear uno nuevo en el que las falencias de las anteriores traten de ser superadas. El diseño y formulación de las políticas, se enfrenta de una manera más consciente no solo a la búsqueda de soluciones de los problemas diagnosticados, sino también al desarrollo de nuevas herramientas con el concurso de diferentes sectores de la Administración, orientadas a la efectiva protección del derecho alimentario. La cuestión de la indiferencia de la teoría jurídica ante las políticas públicas, específicamente en relación con el derecho alimentario, se torna más llamativa desde el momento en el cual se inicia la fase de consagración constitucional y el ulterior desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional (Restrepo, 2009), ya que no solo se refuerza la necesidad de abarcar una reflexión sobre otras formas jurídicas de buscar satisfacción a los derechos sociales fundamentales, sino

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

porque se hace más patente la posibilidad de hacer un trabajo fructíferamente convergente, entre las instancias gubernamentales y las jurisdiccionales. Si se puede constatar la existencia de estrategias estatales a favor del derecho alimentario aun antes de su consagración constitucional, con mayor razón estas deben salir a flote, reforzadas y jurídicamente apropiadas, cuando se cuenta con su consagración como parte de los derechos sociales fundamentales.

Algunas investigaciones realizadas en la materia, tanto en el campo social y jurídico demuestran que en el sistema judicial se han generado más problemas y más agravantes al entorno jurídico el no cumplimiento de la obligación: La criminalización del no pago de alimento concurre hoy como una estrategia común para buscar la atención de las necesidades de los menores. (Ferro, 2011).

La jurisdicción penal según esta postura no pudo neutralizar ni manejar con sus medidas jurídicas el incumplimiento obligacional de alimentos, evidencia de esto es el crecimiento cotidiano de casos de inasistencia alimentaria del país. Surge con nitidez la incapacidad enorme, detectable de entrada, para erradicar sus verdaderas causas, las cuales superan las posibilidades de respuesta judicial que fueron traspasadas a la jurisdicción penal, como única respuesta válida a las falencias que una organización social deficiente está arrojando cotidianamente. (Ferro, 2011). Otras posturas consideran que el derecho penal es considerado como la última ratio del derecho sancionatorio, lo que se traduce en que “el derecho penal no interviene de cara a la regulación de todos los comportamientos del hombre en sociedad, sino sólo en orden a evitar los atentados más graves que se dirijan contra importantes bienes jurídicos” (Blanco Lozano, 2003, pág. 122). Constituyéndose

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

como el encargado de brindar soluciones para aquellas conductas que trasgreden de manera significativa los bienes jurídicos como consecuencia de problemáticas que en apariencia no han logrado solucionar efectivamente otras ramas del derecho.

Por lo anterior, cuando se tiene como pretensión la creación de un tipo penal, es relevante poner en consideración la sanción a imponer, como consecuencia del encuadramiento de los hechos en la conducta punible. A su vez, plantear si con esa sanción se contribuye a la protección del bien jurídico.

Marco teórico

FAMILIA

Es definida la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, y establece que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, la Carta Constitucional en el artículo 42, indica que la pareja que decide conformar una familia tiene los mismos derechos y obligaciones para con sus descendientes en el sostenimiento, el auxilio, la protección, el amparo, la alimentación equilibrada, la salud, la seguridad social la educación, la cultura y la recreación entre otros aspectos; con el fin de garantizar el desarrollo armónico e integral de los menores y los adolescentes

Es bien sabido que el término *alimentos* tiene una acepción más amplia, pues no sólo comprende el sustento diario, sino también los vestidos, la habitación, el respeto hacia los menores de edad, la enseñanza de una profesión u oficio. En este sentido, el vínculo familiar es pues, la causa superior de la prestación de alimentos. El derecho de alimentos se

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

encuentra casi universalmente establecido, pero en especial en los países de origen latino. En Colombia, El título XXI del libro Primero del Código Civil acepta de otro lado dos principios acerca de la obligación de la prestación alimentaria, para lo cual debe tenerse en cuenta como factores esenciales o condiciones de esta naturaleza al considerar que la obligación alimentaria es obligación y genera reciprocidad. Así se consideran también en el Código de la Infancia y Adolescencia. Igualmente, el Estado Colombiano vio la necesidad de regular la obligación alimentaria, razón por la cual introdujo el Título XXI del C.C. el cual título: *De los alimentos que se deben por Ley a ciertas personas*, al interior se tratan temas como quiénes son los titulares del derecho (Artículo 411) cuáles son las reglas generales de la prestación (Artículo 412) cuáles son las clases de alimentos (Artículo 413) y quiénes son los beneficiarios (Artículo 414) entre otros.

El concepto de familia en la doctrina ascendente, según algunos autores como:

Calixto Valverde (1938), quien refiere la familia, tomando su concepto de manera tradicional como una institución natural y social que se fundamenta en la unión conyugal, que liga a los individuos que la integran para el acatamiento en común de los fines de la vida espiritual y material bajo la autoridad del ascendiente originario que preside las relaciones existentes (pág. 8).

Hermanos Mazeaud (1959), es un grupo de personas conformado por varios sujetos vinculados de manera consanguínea y por el afecto, que se encuentra sometido a la autoridad de los progenitores (págs. 6-8).

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Lacruz Berdejo (1979), es una colectividad cuyos miembros activos aportan al sostenimiento de todos con el ingreso de su actividad, unido de forma sanguínea y afecto donde se comparte desde la preparación de alimentos, se busca la educación y se viven en común. (pág. 214).

Planiol y Ripert (1981), es el conjunto de personas que se encuentran unidas por el matrimonio, la filiación o la adopción, vale decir, el conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, bajo la misma dirección y con los recursos proporcionados por el jefe de la casa. (pág. 225).

Carbonnier (1991), familia es el conjunto de personas ligadas por el matrimonio, o por la filiación, o bien por individuos vinculados por lazos de consanguinidad o afinidad resultantes a su vez de relaciones matrimoniales o paternos familiares (pág. 7).

Para la sociología, es claro que la familia es diferente según la cultura en la que se encuentre, caracterizadas por las normas aceptadas que las regulan, valores que dejan de ser determinantes y la forma y calidad de vida (Montesinos, 1996).

En la familia occidental se ve un cambio importante actual, debido a la revolución de la tecnología y las comunicaciones, pero a pesar de esto se debe resaltar que la función de socialización de la familia sigue intacta y se erige vital para el desarrollo normal de la vida en los menores de edad (Martínez, 2009). Se entendería entonces que muchas de las causales de divorcios se originan según el profesor, en una conducta apática del ser

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

individual y la poca adaptación a la sociedad imperante; son temas para el, mas conductuales en el devenir de la vida de cada individuo.

La mayoría de las investigaciones sobre este tema, llegan a conclusiones muy parecidas acerca de vacíos adquiridos por el individuo en el desarrollo de sus etapas de crecimiento, donde crecieron víctimas de algún abuso o de agresiones físicas o psicológicas no resueltas y no reconocidas por el individuo como tal, las cuales afloran cuando empiezan cambios drásticos en su vida como la formación de una familia, donde transmite la influencia adquirida de su formación en valores y principios básicos lo mismo que la transmisión de los conocimientos y experiencias necesarias para la integración social plena y más específicamente para la movilidad y progreso social. (Martínez, 2009, pág. 71)

Para el profesor Martínez, las familias se pueden clasificar en:

1. Familia extensa. Integrada por miembros de más de dos generaciones.
2. Familia funcional. Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades de los individuos que la constituyen.
3. Familia nuclear o nuclear-conyugal. Constituida por el hombre y la mujer, o dos mujeres u hombres, los hijos, unidos por lazos de consanguinidad que conviven en el mismo hogar y desarrollan sentimientos de afecto.
4. Familia homoparental. Relación estable de hecho o matrimonial entre dos personas del mismo sexo, que tienen hijos por intercambios de uno o ambos miembros de la pareja, por adopción y/o procreación asistida.
5. Familias biculturales o multiculturales (transnacionales). Conformadas por aquellas parejas, en las cuales el origen étnico o la primera nacionalidad de uno de sus miembros no es colombiana.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

6. Familia mixta simple. En este caso la familia ha sido alejada de su hábitat por situaciones de desplazamiento forzado. Su comunicación es esporádica pero continua gracias a las tecnologías de la comunicación y la información.
7. Familia monoparental. En este caso se asume una jefatura masculina o femenina. La ausencia de uno de los progenitores puede ser total, o parcial cuando el progenitor que no convive continúa desempeñando algunas funciones.
8. Familia simultánea o reconstituida. Es conformada por la unión de cónyuges, en aquellos casos donde uno o ambos provienen de vínculos legales o de hecho anteriores, que aportan hijos y tienen a su vez hijos en su nueva unión (Martínez, 2009).

Esta clasificación de familia, se ha dado según los cambios sociales y culturales, donde existen factores de genero, sociales, tecnológicos y de comunicación, donde la unión de personas va más allá del concepto tradicional de un hombre y una mujer.

El concepto del profesor Edgar García G., en la obra *Teoría de los bienes jurídicos*, se basa en la teoría trazada por J.M.F. Birnbaum en los inicios del siglo XIX (1834), que de acuerdo a su teoría se explicaba que la conducta delictiva lesionaba bienes jurídicos más no derechos, pues en la medida en que se afecta o ataca un derecho, este no desaparece ni se ve disminuido. Así las cosas, atendiendo a la aclaración que hace el profesor García, Birnbaum consideró en su momento que el concepto de lesión va de la mano de la pertenencia. Es a partir de esta teoría, que en primer lugar se busca sustituir la teoría de los derechos subjetivos imperante para la época y en segunda instancia, a concebir la idea de que el interés o bien tutelado por el derecho es el objeto de protección del derecho penal.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

A partir de los pensamientos planteados por Birnbaum– explica García – Von Ihering, dentro de su filosofía jurídica, planteó que el fin del derecho es garantizar las condiciones de vida de la sociedad, las cuales tenían que ser aseguradas por el poder coactivo del Estado. García É.G. (2006), en su teoría expuso que el derecho se funda en el interés, afirmando que: *(...) el derecho en su aspecto subjetivo es la consagración de la voluntad individual en cuanto tiende a un cierto objeto. El objeto de la voluntad constituye un bien, o sea, con respecto al sujeto que quiere, un interés.* (págs. 52-53).

Dentro de la realidad social en la época en la que vivió este autor, se consideraba el derecho en sentido subjetivo y las lesiones ocasionadas o sanciones no se entendían hacia el bien jurídico respectivo, sino a lo que se le ocasionaba al derecho de cualquier individuo. Consideraba también en menor proporción al derecho desde su perspectiva objetiva, pues García (2006), explicando a Ihering afirma que es *“el aseguramiento de las condiciones de existencia de la sociedad en forma de coacción; y también como las condiciones de existencia de la sociedad, aseguradas por el Estado”*.

García (2006), aclara que, para Feuerbach, la función del Estado era la de: *(...) crear los medios adecuados que impidan las lesiones jurídicas, pues el objetivo del derecho es la conservación de derechos, sus conminaciones protegerán los derechos de los súbditos como los del bien jurídico.* (pág. 59).

En contraposición a la teoría presentada sobre la lesión del derecho y la lesión de un bien, fue planteada adicionalmente por Birnbaum, quien le ponía límites a cada una de las lesiones, donde explicaba que la protección del derecho debía recaer sobre el lesionado,

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

más aún si se hace daño a bienes del estado. Pasó de la teoría planteada por Feuerbach, la cual exponía que son los derechos subjetivos los limitantes del objeto en el cual recae la protección, y plantó su teoría desde la base de que el delito se entiende como lesión, en tanto esta perjudique a bienes comunes:

“(…) de acuerdo con mi parecer, si se quiere tratar el delito como lesión, lo esencial es, y pongo el acento en ello, relacionar necesariamente este concepto con arreglo a la naturaleza, no con un derecho sino con un bien” Birnbaum, 1834 citado por (Hormazábal Malarée, 1991).

Von Liszt, concibe al bien jurídico no como algo meramente jurídico, sino como algo material, algo que es previo al derecho positivo, inherente a la vida tanto individual como en comunidad, pero que el derecho protege y por ende lo eleva a la categoría de bien jurídico. Esto se explica en la medida en que Von Liszt partía de la idea del derecho como una ciencia integral, la cual debe estar conexas siempre a la realidad social y no estancarse únicamente en el estudio de la norma. Por ello, Von Liszt expresa con coherencia que el bien jurídico es un concepto perteneciente a la teoría general del derecho que expresa en el campo de lo jurídico lo que representan los intereses de los individuos en sus relaciones vitales, relaciones que del mismo modo que los intereses, cuando son asumidas por el derecho, se transforman en relaciones jurídicas. (Hormazábal Malarée, 1991).

Los profesores Barbosa Castillo y Gómez Pavajeau (1996), exponen que cualquier idea de limitar la actividad punitiva de Estado en virtud de un bien jurídico, se debe realizar partiendo de una norma jurídica superior que posee esa fuerza vinculatoria sobre las demás, y que en este caso debería ser la Constitución Nacional. Lo anterior, debido a que las

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

constituciones modernas se fundamentan en la dignidad humana y en los derechos que le son inherentes a las personas. Es por esto, que se debe comprender como existe una variación teórica derivada de la concepción del grado de vinculación de la Constitución respecto del bien jurídico, de la cual se derivan las teorías flexibles y las estrictas (Barbosa et al., 1996). En cuanto a la teoría flexible, también denominada amplia o genérica, la constitución es el marco de referencia, dejándole al legislador un amplio campo de acción; respecto de la teoría estricta, se basa en disposiciones concretas o apartados específicos de la Constitución. Afirmando Barbosa et al., 1996, (...) *la misión del derecho penal tiene que derivarse de la proclamación de la dignidad del hombre*, que hace que la Constitución Política Alemana, por tanto, la persona que vive y necesita de la sociedad para realizarse precisa de unas condiciones para su logro, que vendrían a ser los bienes jurídicos, los cuales son concebidos por Gonzales 1983, como aquellos objetos de los que la persona tiene necesidad para su propia autorrealización citado por Barbosa et al.

Como bien explican los profesores Barbosa et al. 2006, tuvo gran influencia en el movimiento político criminal alemán, surgido a propósito del proyecto oficial de 1962 que pretendía la reforma del código penal, en la cual se plantea la obligación que tiene el Estado de asegurar a todos aquellos que conforman esa sociedad, y crear las condiciones de una existencia que satisfaga sus necesidades tal como lo planteó Ihering en su tiempo.

Roxin (1997), distingue el concepto de bien jurídico desde un punto de vista metodológico y desde una perspectiva constitucional. En cuanto al primero señala que:

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

(...) entiende por bien jurídico sólo una forma sintética de pensamiento respecto del sentido y fin de las concretas normas del derecho penal, una abreviatura de la idea del fin y con ello la *ratio legis* de los diversos tipos. (pág. 54).

Crítica el concepto en cuanto se renuncia al significado del bien jurídico para el concepto material de delito, y político criminalmente carece de importancia, ya que es puramente hermenéutico, y solo tiene una función teleológica y de estructuración de la parte especial. Contrario a ello, desde un concepto constitucional señala que:

(...) los bienes jurídicos son circunstancias dadas o finalidades que son útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el funcionamiento del propio sistema. (pág. 56)

En cuanto este concepto, señala Roxin (1997), que abarca tanto circunstancias dadas y finalidades y no sólo a intereses, comprende las circunstancias previas halladas por el derecho y se derivan tesis, como las que no protegen bienes jurídicos, como: conminaciones arbitrarias, las finalidades puramente ideológicas, las meras inmoralidades, los preceptos penales que crean o aseguran la desigualdad entre seres humanos; además de las contravenciones lesionan bienes jurídicos (págs. 56-57).

Fernández (2004), concibe el delito en el marco de un daño que se genera a la sociedad, por tanto, el bien jurídico se asocia a la lesividad.

Luigi Ferrajoli (1996), por su parte explica que: *..impone, por mor de tutela de la libertad personal de conciencia y de autonomía y relatividad moral, la tolerancia jurídica*

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

de toda actitud o comportamiento no lesivo para terceros (pág. 465) por lo tanto se señala de esta forma que el objeto de protección son todos los derechos fundamentales.

Barbosa et al., 1996, citando a Hormázabal Maleree (1991) distingue:

(...) entre bienes jurídicos que tendrían la categoría de micro sociales, entre los cuales se encuentra la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes y otros macro sociales, dentro de los cuales se encuentran los institucionales encargados de la protección de aquellos. (pág. 57).

Los derechos fundamentales solo pueden ser limitados en aras de garantizar los derechos de otros, los cuales deben tener relevancia constitucional sin dejar de lado la obligación en cabeza del Estado de garantizar efectivamente la libertad y la igualdad, referido por Barbosa et al., 1996: *(...) los derechos fundamentales solo pueden verse limitados para salvaguardar otros que, al menos, tengan relevancia constitucional (...) no debe olvidarse la obligación del Estado de remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad sean efectivas* (pág. 58).

De acuerdo a la evolución social, se han venido objetando estas teorías como lo asevera González Rus, (1983) vienen a surgir con nuevas formas de agresión que suscitan la necesidad de dar respuesta típica a las modernas exigencias de tutela derivadas del actual desarrollo tecnológico (pág. 32).

Se analiza entonces cómo la virtud de la norma constitucional es recoger lo que constituyen los fundamentos y valores de una determinada sociedad en un momento

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

histórico concreto, propio de las constituciones democráticamente elaboradas. Lo anterior, enlazado con la postura en que los bienes jurídicos son la elevación de lo que ya en la realidad social se muestra como un valor.

Finalmente, los profesores Barbosa et al. (1995), concluyen en el sentido de que para tener un acercamiento a un concepto universal de bien jurídico hace falta alcanzar ciertos criterios que son diversos por naturaleza: El delito de inasistencia alimentaria podría plantearse a largo plazo, donde se tenga en cuenta diferentes tipos de elementos o factores a analizar, en donde la realidad social, la historia, la evolución social, las posturas culturales y hasta la religión, deberían ser tenidas en cuenta para que pudiera entenderse que el fin del derecho, mas que una postura de protección también prevenga las lesiones y sanciones al infractor (pág. 59).

Carbonell, Carbonell y Gonzales (2012), la familia ha sido el lugar primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros. (pág. 4).

Obligacion alimentaria

En primer lugar, se describe el contenido normativo de la obligación de asistencia alimentaria, así como los procesos que es posible iniciar para hacer cumplir dicha obligación. En el Código Civil “Alimentos” (Art 411) es el nombre genérico que se le da a un tipo de obligación de origen legal también contemplado en el Código Penal Colombiano, CPC (arts. 435 numeral 3, art. 442, 443 numeral 2, art. 444, 448 y 498), por medio de la cual se le impone a un sujeto llamado alimentante la obligación de proveer al

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

alimentario, que es un sujeto con quien tiene un vínculo familiar, los medios necesarios para su subsistencia y bienestar, surgen en el Código Civil se distinguen dos tipos de alimentos necesarios y alimentos congruos (art.413). Además del vínculo entre los sujetos, para que se configure la obligación es necesario que el alimentario carezca de medios suficientes para subsistir en condiciones dignas (Medina, 2010), y que el alimentante tenga capacidad económica para proporcionar dichos medios. La obligación alimentaria y los procedimientos judiciales relativos a su exigibilidad están dispuestos, de manera general, en la legislación civil. Sin embargo, para el caso de los menores de edad, el Código de Infancia y la Adolescencia (en adelante el CIA) impone ciertas particularidades:

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto” (Art. 24).

Aunque el origen de la obligación alimentaria es legal, la Corte Constitucional ha señalado que la misma tiene fundamento constitucional en el deber de solidaridad. En la sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), esta Corporación estableció que:

“(…) esencia, la obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles. Ella presupone (como las otras) la existencia de una norma jurídica y una situación de hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho (…)

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Su especificidad radica en su fundamento y su finalidad, pues, dicha obligación aparece en el marco del deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia, y tiene por finalidad la subsistencia de quienes son sus beneficiarios. El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio propio. En síntesis, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley obliga. El deber de asistencia del Estado es subsidiario, y se limita a atender las necesidades de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Ahora bien, cuando el alimentario es menor de edad, el origen de la obligación es constitucional, reconoce su derecho fundamental a recibir alimentos y la prevalencia de sus derechos sobre los demás con base en el “interés superior del niño”. En el mismo sentido, distintos instrumentos de derecho internacional con rango constitucional, como la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, han consagrado el interés superior del niño y la protección especial que debe dársele a los mismos. En Colombia, el incumplimiento de la obligación alimentaria permite acudir a dos tipos de procesos judiciales que no son excluyentes entre sí: el penal por el delito de inasistencia, y el civil ejecutivo de cobro de las cuotas de alimentos en mora. Así mismo, el incumplimiento podría dar lugar a la activación del mecanismo administrativo de restablecimiento de derechos en determinadas situaciones, en los que el acreedor alimentario es un menor de edad.

En otro, enfoque los alimentos para mayores de edad solo son exigibles si la persona no puede subsistir por sus propios medios, según el Artículo 422 del Código Civil, mientras

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

que los alimentos para menores de edad se pagan en razón al parentesco, así el hijo se encuentre en buenas condiciones económicas y no le falte algo para subsistir, tal y como lo consagra el Artículo 267 del mismo Código. Consecuente con lo anterior el derecho de alimentos lo reconoce la ley a las personas en estado de necesidad de reclamar a sus más próximos parientes aquellos auxilios necesarios para su sustento, habitación, asistencia médica, vestido y en general lo que les es indispensable para vivir. El Código Civil Colombiano establece, a partir del artículo 412, las reglas para la prestación de alimentos y los clasifica en Congruos y Necesarios: Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida.

Ahora bien, existe desde el 2017 (Semana, 2017) un proyecto de ley donde se solicita la despenalización del delito de inasistencia alimentaria, esto sensibiliza a muchos renglones sociales que sienten temor por el pago de alimentos que le corresponde a padres que han sido irresponsables con la manutención de sus hijos, o en su defecto a adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de ayuda de forma voluntaria por parte de sus hijos y que la ley les obliga a ser responsables de sus gastos hasta la hora de su muerte.

La exposición de motivos de este proyecto ya radicado, indica que de 100.000 denuncias anuales por inasistencia alimentaria (Semana, 2017) lo cual justifica que debe existir una sanción para los infractores que les sea ejemplar ante el incumplimiento de sus responsabilidades con los más vulnerables.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Parte de esta propuesta se fundamenta en la creación de una base de datos que tenga vínculos con instituciones estatales con el fin de no permitir el acceso a créditos, legalizaciones notariales, ningún cargo en instituciones del estado; porque se considera que si una persona es responsable de sus obligaciones y tiene la forma de acceder a algunos lujos sustentados en la capacidad de sus ingresos no tendría porque negarse a pagar un derecho inherente a la vida y adquirido por la paternidad, por lo cual se debe hacer acreedor de una sanción máxima como la privación de su libertad.

Los detractores de este proyecto (Semana, 2017) alegan que existe una gran congestión del aparato judicial colombiano y tal vez no logre ser un beneficio la salud mental y psicológica de un menor, saber que su padre esta privado de la libertad, tampoco aseguraría que podría pagar las cuotas alimenticias adeudadas. Sigue siendo por lo tanto, un tema de discusión de las cortes y de la Fiscalía General de la Nación, los cuales buscan la fluidez del sistema judicial y carcelario del país. Según lo anterior un proceso penal traería mayor quebrantamiento de la familia, como base de la sociedad.

Existe otro proyecto presentado que muestra la implementación de otro tipo de sanciones a manera administrativa (Semana, 2017), donde exista una sanción o pena y no la privación de la libertad. Según esta propuesta seria una red de deudores alimentarios (REDAM), vigilada por el Ministerio de Justicia, esta consiste en incumplimiento por tres meses seguidos de las cuotas alimentarias, el afectado puede solicitar a un juez de la republica la sanción administrativa y bloquear su cedula para adquirir negocios bancarios y financieros. Vale la pena indicar que solo es aplicable previa sentencia judicial y no verbal.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

El 11 de mayo de 2019 el Fiscal Martínez (Semana 2017), planteo alternativas que se vienen analizando al interior de la Fiscalía general, conforme a la despenalización de la inasistencia alimentaria porque para este ente estatal es absurdo que un deudor en la cárcel pueda tener posibilidades de conseguir un trabajo y cancelar las cuotas alimentarias que adeuda. Pese a lo argumentos presentados no se ha manifestado ningún cambio diferente frente a ninguna de las propuestas, las cuales continúan aun en estudio.

El tipo penal

La inasistencia alimentaria esta contemplada como un delito contra la familia, penalizado dentro de los actos en contra del bien jurídico protegido. (Artículo 233 Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano modificado por el Artículo 1 de la ley 1181 de 2007, modificado por los Artículos 1, 2 de la Ley 1452 de 2012). Artículo 233 Código Penal:

El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena será de prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando la inasistencia alimentaria se cometa contra un menor.

Las situaciones que determinan una obligación nacen de vínculos familiares o solidarios que se adquieren por derecho, lo cual quiere decir que no dependen de la

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

conducta de individuos y prevalecen inherentes al ser humano, dentro de la configuración de relaciones motivadas por la unión o vínculo de familiares, se considera que existe delito cuando existe o se comprueba el incumplimiento de la prestación alimentaria siempre que ocurra sin motivo, sin razón que lo justifique. (Art. 233, et. al)

La Corte Constitucional ha señalado que:

La conducta antes descrita es de peligro, toda vez que no requiere la causación efectiva de un daño al bien jurídico protegido, de ejecución continuada, dado que la violación a la norma persiste hasta tanto se dé cumplimiento a la obligación; exige un sujeto pasivo calificado que es la persona civilmente obligada, un sujeto activo que es el beneficiario y, concretamente los ascendientes y descendientes, adoptante o adoptivo y el cónyuge, y un elemento adicional contenido en la expresión sin justa causa; además se trata de una conducta que solo puede ser sancionada a título de dolo, por tanto, requiere que el sujeto obligado conozca la existencia del deber y decida incumplirlo”... (Sentencia T-098 de 1995)

De forma continua la Corte, ha señalado (Sentencia T-502/92 y T-098/95) y de acuerdo a lo establecido en el At. 263 del Código Penal, que el delito de inasistencia alimentaria es de carácter permanente que se da desde el primer incumplimiento del pago y se alarga todo el tiempo en que no se pague o que se trate de evadir por el infractor.

Por lo tanto:

En esencia, la obligación alimentaria no difiere de las demás obligaciones civiles. Ella presupone (como las otras) la existencia de una norma jurídica y una situación de

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

hecho, contemplada en ella como supuesto capaz de generar consecuencias en derecho y encontrarse en ciertas circunstancias económicas”. (Sentencia C-237/97)

Determina la Corte que se trata de una lesión motivada por el no cumplimiento de un deber legítimo, realizado por un individuo cuya conducta es sancionada por la Ley, porque no ejerce su obligación que nace como un deber en este caso, la paternidad responsable; el cual debe asumir como proveedor de derechos y obligaciones. Igualmente, el valor estimado al daño que pueda ocasionar al sujeto vulnerado, por lo cual la Corte Constitucional ha señalado:

El fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que une a los miembros más cercanos de una familia y su finalidad es la subsistencia de los beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma acusada es la familia y no el patrimonio. A pesar de que dicha obligación se traduce, finalmente en una suma de dinero, no se castiga a quien la incumple por defraudar el patrimonio ajeno, sino por faltar a un deber nacido del vínculo de parentesco o matrimonio y poner en peligro la estabilidad de la familia y la subsistencia del beneficiario.” (Sentencia C-237/97 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz).

El primer paso indica la conducta penal, desde el vínculo que origina el derecho en este caso la asistencia alimentaria, y que se prueba de manera clara y expresa con el registro civil del menor vulnerado. Aquí se demuestra la relación de parentesco.

La discusión para algunos se encuentra en torno al delito de inasistencia alimentaria, el cual ha tenido varias facetas. Inicialmente, el debate se presentó tras la radicación en el

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Congreso de varios proyectos de Ley que discutían si resultaba conveniente o no mantener penalizadas tanto la inasistencia moral como la alimentaria, o si, como finalmente se hizo, debía mantenerse únicamente el tipo de inasistencia material. Una vez definidos esos aspectos, los trabajos relativos al tipo penal se enfocaron exclusivamente en discusiones dogmáticas y de técnica legislativa, dejando relegada casi por completo la discusión de política criminal.

Con la Constitución de 1991 artículo 44, se protege a la familia sin importar que tipo de familia es, refiriéndose la inasistencia alimentaria como delito, porque para la Corte Constitucional prima el derecho a la igualdad de los niños sin importar la unión de género el cual procesa su filiación familiar, sea heterosexual y/o homosexual, es decir ampliamente las uniones maritales de hecho se encuentran establecidas como legales, cuando cumplen con los requisitos y demuestran convivencia continua y un sustento favorable para el sometimiento de todo tipo de alimentos para los niños; la Corte Suprema de Justicia expresa que los niños son el objeto mas importante, deben ser protegidos de manera especial que otorga el estado colombiano, más ampliamente entendido el concepto como la poca importancia del vinculo entre dos personas, porque prima el derecho sobre las demás personas.

Desde la aparición del concepto de inasistencia alimentaria como delito en la legislación colombiana se han esgrimido principalmente cinco clases de argumentos apoyando la penalización de esta conducta. Primero, la necesidad de proteger determinados bienes jurídicos como la unidad familiar o la solidaridad, entre otros que justifican la creación o mantenimiento de un tipo penal intimidatorio; segundo, la ineficacia de que las

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

acciones de tipo civil para enfrentar el fenómeno de la inasistencia; tercero, la importancia de mantener penalizada la inasistencia en razón de sus graves efectos sociales en el largo plazo; cuarto, la idea de que la inasistencia constituye una forma de violencia contra la mujer. Por último, el argumento de que el alto número de procesos judiciales por inasistencia demuestra la eficacia del tipo penal.

Según Pabón (2018), la facultad del uso de la violencia debe ser institucionalizada como una función únicamente del Estado, en nombre o en defensa de los derechos humanos y de la vida, las cuales se utilizan específicamente en situaciones establecidas por la ley dentro de los marcos legales y normativos de un país, incluyendo actividades propias de la participación ciudadana como la política y el activismo civil; donde no se permite el uso de la agresión como medio para alcanzar los objetivos propuestos sin ningún tipo de excepción.

Uno de los argumentos más comunes a favor de la penalización de la inasistencia alimentaria ha sido la necesidad de proteger determinados bienes jurídicos de alta importancia social. Desde las primeras discusiones que se presentaron frente a la expedición de la Ley 83 de 1946, el Decreto 1699 de 1964, la Ley 75 de 1968 y algunos Proyectos de Ley presentados entre 1956 y 1963, se afirmó que la necesidad del tipo penal de inasistencia, la cual esta separada del daño moral porque anteriormente se encontraban juntas. Autores como Alfonso Reyes Echandía, le atribuyeron un elemento social y educador que contenía cual era el deber como individuo, es decir el deber ser de un buen ciudadano y hacer consciente a los individuos de conformar una sociedad mejor, con nuevas formas de conducta mas civilizadas e incluyentes. A medida del desarrollo de esta

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

tendencia en el derecho penal el estado se establece que la proyección es lo que pretende tutelar y proteger valores como el bienestar de la familia, la unión familiar, la solidaridad y la justicia, el derecho a la asistencia económica, como orden legal específico entre otros similares que en todo caso es respaldar a la familia como la base de la sociedad y que el derecho penal debe establecerse frente a este enfoque de prevención y proteccionismo más que a un comportamiento exclusivo sobre la criminalidad.

Desde los orígenes de la tipificación otro argumento presentado fue que la misma resultaba necesaria debido a la ineficacia de las herramientas jurídicas civiles. Bernardo Gaitán Mahecha, por ejemplo, presentó en 1956 un proyecto ley para tipificar el abandono familiar (que en ese momento se entendía que comprendía la inasistencia alimentaria), y en la exposición de motivos del mismo señaló que su propuesta se justificaba, entre otras cosas:

porque “(...) la simple intervención del magisterio civil [era] impotente para evitar el doloroso y criminal atentado. De ahí la urgencia de estudiar una reglamentación de carácter penal, que ponga fin a los desmanes de tantos padres y madres de familia que ponen con su conducta antisocial en peligro la vida y la moral de los hijos.

El derecho natural establece la relación sanguínea como inherente al ser humano, donde la relación de padres a hijos es un vínculo inquebrantable que no justifica conductas inadecuadas, que bien podría llamarse criminales por la lesión que ocasionan en el desarrollo integral del ser humano; por lo cual la norma penal considera un delito contra la familia la inasistencia alimentaria, lo cual justifica toda sanción impuesta al infractor que dañe o perjudique en su bienestar intelectual y emocional.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Por otra parte, existe otra tendencia mas reciente sobre la inasistencia alimentaria la que se considera una forma de violencia contra la mujer. Esta idea está relacionada con la expedición de la Ley 1257 de 2008, *Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres (...)*”, que en su artículo 2º estableció que:

(...) por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede tener firmeza en los vinculos de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas.

Aunque el artículo no menciona expresamente la inasistencia alimentaria, la interpretación según la cual constituye violencia patrimonial ha sido acogida en escenarios; por ejemplo, la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, desarrollada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, hace alusión expresa a la lesión como forma de violencia patrimonial contra las mujeres

En el marco de los motivos presentados que se presentan en el tipo penal de la inasistencia alimentaria no es variable, algunos conceptos son en contra y otros a favor sobre la forma en que el estado colombiano históricamente institucionaliza su penalización, por lo cual su enfoque sigue siendo el mismo actualmente, se podría mencionar los siguientes: a) estar fuera del entorno constitucional la penalización de incumplimiento a los contratos civiles; b) el irrespeto a lineamientos del derecho penal, garantizador y estatal; c) el volumen de denuncias penales existentes en el sistema judicial; d) concebir la pobreza

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

como acto criminal; e) hacer respetar los derechos de los considerados vulnerables a sus alimentos; f) el aumento de problemáticas sociales que se dan en su entorno; g) el aprovechamiento de relaciones de parejas inadecuadas, que no justifiquen el daño a los menores y h) continuar usando las normas civiles para la protección de la inasistencia alimentaria.

La inconstitucionalidad de penalizar el incumplimiento de deudas civiles Con base en la prohibición del artículo 23 de la Constitución de 1886, fue demandado por inconstitucionalidad el artículo 40 de la Ley 75 de 1968, que consagraba el tipo penal de la inasistencia alimentaria. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 15 de abril de 1973 afirmó que la obligación alimentaria no era simplemente patrimonial, y que por ello no representaba un interés meramente particular, sino que suponía la afectación de un interés de toda la sociedad. Posteriormente fue demandado el artículo 236 del Código Penal de 1980, que consagraba el delito, aduciendo que el mismo violaba la prohibición imponer detención, prisión o arresto por deudas, consagrada en el artículo 28 de la Constitución Política. Por medio de la sentencia C-237 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) la Corte Constitucional acogió el mismo criterio de la Corte Suprema al afirmar que la obligación alimentaria no es simplemente patrimonial, porque: *no solo pone en riesgo el patrimonio del beneficiario sino su propia subsistencia*. Más tarde, cuando se demandó la constitucionalidad del artículo 233 del CP vigente con base en los mismos argumentos, la Corte lo declaró exequible por medio de la sentencia C-984 de 2002 (M.S. Marco Gerardo Monroy Cabra), señalando que el análisis de constitucionalidad hecho en la sentencia C-237 de 1997 era aplicable a este caso.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

En algunas ocasiones se puede encontrar que los opositores a la penalización de la inasistencia alimentaria, presentan razones de vulnerar principios fundamentales del derecho penal como el de *Ultimo Ratio*, porque su aplicación debía ser realizada habiendo acabado en recurrir a las normas del derecho civil. En este caso, acudieron a este argumento los demandantes del artículo 263 del Código Penal de 1980 y 233 del CP vigente, que señalaron que en un Estado Social de Derecho únicamente debería acudir a la vía penal en aquellos casos en los que resultan ineficaces otras vías judiciales o administrativas.

Así mismo, lo hicieron los autores de los Proyectos de Ley No. 170 de 2004 Cámara, que pretendía eliminar el delito de inasistencia alimentaria, y 085 de 2009 Cámara, que buscaba limitar la vía penal a los casos en los que se hubiera agotado la vía civil. Ninguno de los dos proyectos fue aprobado. En realidad, los motivos reales son los altos volúmenes de congestión que presenta el ordenamiento judicial y que provoca lo beneficioso de seguir con la penalización de la lesión. Algunos de los que han relacionado la congestión judicial generada por el delito, son los siguientes: en 2009 el entonces Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossío, anunció que ante el alto número de personas en las cárceles del país por el delito de inasistencia alimentaria, hacía falta replantear la pena de cárcel por esta conducta. Sin embargo, el gobierno no llevó a cabo la reforma anunciada. Así mismo, la Corporación Excelencia en la Justicia presentó en 2009 su proyecto “Línea Base de la Congestión Judicial en la Jurisdicción Ordinaria”, que entre otras cosas proponía la supresión del delito como medio para descongestionar la jurisdicción penal. Este argumento también fue esgrimido en los dos Proyectos de Ley antes mencionados (170 de 2004 Cámara y 085 de 2009 Cámara).

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Aunque en teoría, esto podría superarse a través del reconocimiento de la incapacidad económica como eximente de culpabilidad, en la práctica judicial no siempre se hace este reconocimiento. Así por ejemplo, uno de los argumentos que dio origen a la sentencia C-237 de 1997 fue que el Código Penal de 1980 “*castigaba la incapacidad económica del deudor y sustraía al Estado de su deber de proteger a las personas que por sus condiciones económicas se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta*” (artículo 263). Sin embargo, ante este reclamo la Corte Constitucional afirmó que el Derecho no era indiferente ante la incapacidad económica del presunto deudor, pues la misma excluía la culpabilidad en el delito de no pago alimentario.

En la practica las decisiones de la Corte Constitucional se alinean al tipo penal de inasistencia alimentaria, alegando que la pobreza no es un argumento que permite violentar los derechos de los beneficiados, y que podría tenerse en cuenta dos situaciones: primero, en la rama judicial se le resta importancia a la precaria situación económica del infractor como una causa que justifique el incumplimiento de esta obligación y segundo en el derecho penal y su procedimiento la carga de la prueba le corresponde al infractor.

Al analizar el artículo 129 del Código de Infancia y Adolescencia, presume: a) que el infractor ejerce un ingreso minimo; b) competencia para establecer el tipo penal que protege los derechos de los vulnerados a sus alimentarios; c) El desequilibrio entre el volumen de las denuncias por la inasistencia alimentarias y las resoluciones judiciales en cada proceso; d) La exposición de motivos del Proyecto de Ley 170 de 2004 Cámara afirma que los deudores irresponsables usualmente *después de lograr una conciliación en el marco del proceso penal cumplen apenas con las primeras cuotas que les permiten dar por*

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

terminado el proceso y después no lo vuelven a hacer, a algunos otros, según señalaron jueces y fiscales entrevistados, ni siquiera parece importarles tener en curso un proceso penal en su contra; e) recrudecimiento del conflicto social por la ineficacia para la prevención de cometer el delito, el mismo Proyecto de Ley conceptuo que este delito no consigue remediar la protección del bien jurídico que es la familia, contrariamente el efecto pone en peligro la vulnerabilidad de la unidad familiar, porque puede intervenir de forma negativa al cumplimiento del pago de su obligación. Lo primero ocurre porque la denuncia penal genera resentimientos que afectan principalmente a los hijos; y lo segundo, porque si el deudor tiene recursos no se le demanda penalmente sino que se le embargan los bienes y al empezar a pagar se suprime la acción penal. En cambio, si es pobre y lo mandan a la cárcel, queda automáticamente imposibilitado para obtener recursos y excusado para hacer cualquier pago.

Posteriormente, las posibilidades de que un deudor con antecedentes penales consiga trabajo son más bajas que las de alguien sin antecedentes, excluyendo las graves secuelas que le produce al deudor alimentario su estadía en prisión. El uso inadecuado como “instrumento de venganza sentimental, como otro argumento de quienes abogan por la despenalización de la IA es que en la práctica se abusa de la figura al usarla como “instrumento de venganza sentimental”. Esta idea es especialmente clara en los Proyectos de Ley No. 170 de 2004 Cámara y 085 de 2009 Cámara y en el estudio de José Guillermo Eduardo Ferro Torres. En los tres casos los autores afirman que la mayoría de denuncias por IA son interpuestas por mujeres. En el caso de una mayor adecuación de la vía civil para proteger los derechos del alimentario, resulta contrario al argumento pro penalización expuesto antes, según el cual la ineficacia de la vía civil había llevado a recurrir a la vía

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

penal, recientemente el Proyecto de Ley No. 085 de 2009 afirmó que la vía civil resulta más adecuada para proteger los derechos del alimentario al que no le han cumplido, pues la misma ofrece el trámite del proceso abreviado que hace más rápida la obtención de justicia en estos casos. Además, enfatiza el proyecto, que:

(...) la protección a la asistencia alimentaria por vía ordinaria, es importante, por cuanto el Código de la Infancia y la Adolescencia ha fortalecido las medidas cautelares y el privilegio de los créditos producto de sentencias por alimentos como efectivamente nuestra legislación lo permite.

Marco legal

La normatividad colombiana consagra el derecho de los alimentos con categoría superior, como parte integrante del desarrollo integral de los seres humanos. En la Constitución Política, este derecho se halla en un capítulo especial, que se enmarca dentro de los derechos de la familia, del niño, niña y adolescente. Los artículos 42, 43, 44 y 45 desarrollan el tema, así:

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Los hijos habidos en el

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable.

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Proceso de alimentos se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la concepción.

En caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante el defensor de familia, los jueces competentes, el comisario de familia o el inspector de policía de la residencia del menor o éstos de oficio.

La conciliación Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998 y Ley 640 de 2001. Artículo 35, Ley 640 de 2001. Requisito de procedibilidad: en los asuntos susceptibles de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civiles, contencioso administrativa laboral y de familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas áreas. Lo anterior indica que para la solicitud de imposición de cuota alimentaria en favor de un menor, podrán la madre o el padre del niño, o sus parientes o los funcionarios que conozcan del caso, provocar una conciliación con la persona obligada para suministrar dichos alimentos. Así las cosas, el obligado (que esté incumpliendo) para prestar alimentos será citado al despacho del

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

comisario de familia, del defensor de familia, del inspector de policía o del juzgado competente, para tratar de llegar a un acuerdo sobre: monto de la cuota alimentaria, modo de suministrarla, periodicidad de la misma y garantía para su cumplimiento.

El obligado podrá autorizar que le sea descontada de su salario la cuota alimentaria acordada. Una vez se llegue a la conciliación sobre la cuota alimentaria, la forma de pago, los plazos para pagarla y la garantía correspondiente, se levantará el acta, que será firmada por el funcionario que la preside y las partes. A continuación, el funcionario la aprobará mediante auto y así la conciliación prestará mérito ejecutivo, es decir, que en caso de incumplimiento por parte del obligado, dará lugar a la iniciación del proceso ejecutivo por alimentos. En el evento de no presentarse el demandado una vez citado en dos oportunidades, habiéndosele dado a conocer el motivo de la citación, o si la conciliación fracasa, el defensor de familia, mediante resolución motivada, podrá fijar prudencialmente una cuota alimentaria provisional y ésta prestará mérito ejecutivo. El funcionario deberá presentar ante el juez competente la demanda de alimentos para que la cuota fijada provisionalmente sea confirmada por el juez.

Decreto 2737 de 1989, Código del Menor. Artículo 111. Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006. Las conciliaciones sobre alimentos podrán variar de acuerdo con las circunstancias, tanto del obligado a prestar los alimentos como de las necesidades de quien recibe el apoyo económico. Igualmente, la sentencia judicial de alimentos es revisable para efectos de regular la cuota alimentaria, cuando el demandado es padre de otro u otros menores de edad. El acta conciliación deberá cumplir con las siguientes formalidades: a) Indicar el lugar, la fecha y la hora de la audiencia de conciliación; b) la identificación del conciliador; c) la identificación de las personas citadas

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

para conciliar e indicación de las que asisten a la diligencia; d) relato somero de las pretensiones objeto de la conciliación; e) el acuerdo logrado por las partes dentro de la diligencia. Cada una de las partes que participen en la conciliación deberá recibir una copia de la misma.

La demanda por alimentos para los menores se tramitará de conformidad con lo establecido por la Ley 1098 (Código de la infancia y adolescencia), siendo un proceso de única instancia. La demanda por alimentos deberá contener el nombre de las partes, el lugar de notificaciones de las mismas (lugar de residencia, domicilio, paradero o sitio de trabajo), el valor de los alimentos solicitados, los hechos que sirven de fundamento para solicitarlos, las pruebas que se pretenden hacer valorar, y se acompañará con los documentos que estén en poder del demandante. Esta demanda podrá ser presentada verbalmente o por escrito. En el evento de faltar algún documento que el demandante no pueda anexar, a solicitud de parte o de oficio el juez ordenará su expedición a cargo de la autoridad que corresponda (ley 1564 de 2012 Código general del proceso). Si el juez lo estima pertinente, podrá decretar el embargo del salario del demandado (en la cuantía que estime pertinente) en el mismo auto admisorio de la demanda (para garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria), para lo cual oficiará al respectivo pagador del demandado. Podrá ordenar, igualmente, la retención del porcentaje que estime pertinente de las cesantías del demandado, para que garantice los alimentos del menor, en el evento de retirarse del empleo o de ser suspendido en el mismo.

Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. ley 1564 de 2012 Código general del Proceso. Sirven como pruebas la

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.

La Corte Constitucional, define jurídicamente la obligación alimentaria en favor de los menores y sus garantías procesales, como resultado de la aplicación de un tratamiento jurídico especial sustentado en claros principios constitucionales (Sentencia C - 237 del 20 de mayo, 1997), y doctrinariamente el Magistrado José Arango Mejía, sobre el delito de inasistencia alimentaria señaló:

El deber de alimentos así como la porción conyugal son instituciones fundadas en el principio de solidaridad que impregna el conjunto de las relaciones familiares, (...) El deber de inasistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia. (Sentencia C - 174 del 18 de marzo, 1996).

La Corte en sentencias ha proferido que la Fiscalía debe ser la institución que ejerza la investigación de los comportamientos delictivos, la cual ha sido otorgada de acuerdo a la constitución quien lo faculta para realizarla y sancionar comportamientos considerados inadecuados e insostenibles. Esta investidura se le otorga por derecho propio y no vulnera la Constitución Colombiana, siempre y cuando esta autonomía o facultad, respete el debido proceso como se debe realizar en la investigación de todos los delitos, respetando los términos y procedimientos establecidos en los códigos vigentes.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Metodologia

El estudio se realizará de manera descriptiva, con un diseño metodológico cualitativo con el fin de abordar la cuestión planteada. Según Hernández –Sampieri (2018), el modelo cualitativo se caracteriza por entablar bases a través de tres contextos fundamentales donde se halla lo sociológico, lo cultural y lo ideológico, donde los seres humanos fungen el papel protagonista puesto que a partir de las relaciones entre los sujetos se trata de construir un conocimiento estable y reconstruir el dialogo sujeto-sociedad. Para desarrollarlo, se emplea un análisis documental para visualizar extractos de libros, artículos de revistas indexadas, libros virtuales (instituciones públicas o privadas), bases de datos, leyes y normas técnicas entendidas como aquellos documentos aprobados por un organismo reconocido que entabla con precisión y delimitación el desarrollo que ha de darse respecto de un proceso, un producto o un servicio.

Según Bechara (2018), la búsqueda de herramientas podrán construir conocimiento científico en el mundo jurídico para determinar las características comunes de las investigaciones críticas del derecho actual, para que el mismo proceso como componente activo pueda desarrollarse mediante la aplicación de métodos que comprueben argumentos y la comparación de teorías que permitan defender los fenómenos jurídicos que se reflejan desde la realidad social y normativa (p.227).

Los métodos que sirvieron para la realización de la investigación fueron el hermenéutico por el carácter deductivo de la revisión de los documentos de análisis. De igual manera, se trabajó el método inductivo para la construcción sintética de los capítulos

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

del informe. Hay la aplicación del método histórico, igual, el método dialéctico y el analógico, de acuerdo a la interpretación de oposiciones o convergencias en la experiencia jurídica tratada en cada uno de los informes de investigación que fueron trabajados.

El ciclo de investigación del proyecto inicio con la identificación de factores importantes, la selección de la bibliografía y los documentos que puedan dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, además soportar la información con conceptos, y marcos teóricos que den lugar a obtener resultados y conclusiones hacia la creación de nuevos conocimientos.

Líneas de investigación. Convivencia paz y justicia

Sublíneas. Relaciones individuo- estado, democracia y ciudadanía.

Metodo y proceso

Las fuentes secundarias son las que ya han procesado información El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción y reorganización de la información, bibliografía, tesis de artículos de analisis podemos citar las correcciones de los asesores, el anteproyecto, y el informe final de la investigación.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Desarrollo del proceso analítico

En Colombia, varios estudiosos del derecho penal han señalado que el Código Penal tiene contempladas una gran cantidad de conductas, que en muchas ocasiones no corresponden a una necesidad real de ser abordadas, si se tiene en cuenta el principio de mínima intervención y que se debe tener en cuenta la congestión del sistema judicial de forma innecesaria, como podría ser el delito que se ha elegido como objeto de la presente investigación. La Corte Constitucional, ha indicado que en virtud del principio de mínima intervención del derecho penal como medida sancionatoria, debe ser impuesta como la última alternativa, si y solo si el derecho civil no restituye los derechos de los vulnerados. En consecuencia, el Estado no está en la obligación de sancionar penalmente todas las conductas consideradas como antisociales, siendo la sanción penal la más drástica debido a que en la mayoría de los tipos penales conlleva la pérdida de la libertad, adquiriendo justificación cuando se establece una necesidad real para la protección de los intereses de la comunidad (Corte Constitucional, Sentencia C-636, 2009).

En la actualidad, el principio de ultima ratio o mínima intervención, ha dejado de ser un instrumento de reacción contra ataques a bienes jurídicos protegidos por el derecho penal y ha evolucionado como una herramienta para asegurar derechos, lo que significa que ha pasado de ser la ultima ratio a ser única ratio. (Milanese, 2004). Entendido el derecho penal como la ultima ratio del derecho sancionatorio y la sanción carcelaria, como la última opción, la Corte Constitucional ha señalado que (...) *la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad* (Corte Constitucional, Sentencia C-636, 2009).

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Zota Bernal (2016), se refiere al no cumplimiento de la obligación desde una optica de género y desde un enfoque de la realidad social actual:

(...) muchas mujeres deben asumir no solo el trabajo de cuidado cotidiano de sus hijos, sino también su manutención. En ocasiones el asumir roles de jefatura se da sin contar con condiciones de subsistencia mínimas, ni de acceso al mercado laboral remunerado en condiciones de equidad. (pág. 10)

En la Sentencia T-502 de 1992, la Corte destaca las consecuencias de la inasistencia alimentaria, caso concreto en el caso de los menores de edad ocasionando situaciones de agresiones y estados de total indefensión para las víctimas. Argumento comprensible a todas luces cuando se tienen en cuenta que la tasa nacional de mortalidad nacional por desnutrición de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Salud (2018), es de 4,29 por 100.000 niños menores de 5 años (pág. 8).

Asimismo, se considera que el incumplimiento de la obligación alimentaria tiene consecuencias a largo plazo, siendo un riesgo para la sociedad colombiana debido a que la persona que se busca respaldar como resultado del proceso frente a la lesión puede verse en riesgo frente a la comisión de delitos y situaciones indignas (Patiño Becerra, 2015).

Son cinco los argumentos que se han señalado como a favor de este delito de acuerdo a Bernal; La Rota (2012), siendo:

(..) primero, la necesidad de proteger determinados bienes jurídicos como la unidad familiar o la solidaridad, entre otros que justifican la creación o mantenimiento de un tipo penal intimidatorio; segundo, la ineficacia de que las acciones de tipo civil para

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

enfrentar el fenómeno de la inasistencia; tercero, la importancia de mantener penalizada la inasistencia en razón de sus graves efectos sociales en el largo plazo; cuarto, la idea de que la IA constituye una forma de violencia contra la mujer y por último, el argumento de que el alto número de procesos judiciales por inasistencia demuestra la eficacia del tipo penal (...). (págs. 20-21)

Según el Doctor Santiago Mir Puig (1982), en su libro *Introducción a las bases del Derecho Penal: concepto y método*; el derecho penal asegura los sujetos activo y pasivo, dentro de los conceptos de bienes jurídicos garantizados por el estado en la función del derecho penal consiste en la protección de bienes jurídicos, pero el concepto de bien jurídico se aleja de los existentes en la jurisprudencia. La estructura que guarda el derecho penal garantiza la seguridad de conductas y de expectativas para el sujeto activo y el sujeto pasivo: el individuo debe saber cómo actuar y las consecuencias de no hacerlo correctamente. Mas allá de expectativas, se establece en la garantía de restablecer los derechos que fueron violentados, generando confianza en el ordenamiento jurídico que organizan el desarrollo socioeconómico del Estado y las actividades de los distintos sujetos en mención:

En este caso la regulación jurídico penal tiende a la protección de la consistencia de procesos de interacción mediante la creación de una comunicación que ha de garantizar y abrir posibilidades de participación en los sistemas sociales, conectando con la función de la pena respecto de la relación entre Estado y sujeto activo (pág 73, en adelante).

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

En efecto, la pena cumple, en el actual régimen de ejecución de la pena, la función social lo que significa el mirar al infractor desde un enfoque amplio y no únicamente como el objeto de un proceso penal, pensando en mejorar las relaciones entre el Estado y los individuos que han quebrantado la norma y que son sujetos de restauración positiva en un ciclo de aprendizaje, proceso que debe tender no sólo a la adaptación a las normas dominantes, sino a elaborar, en un proceso de interacción, alternativas a la conducta criminal, y, con ello a la participación en las relaciones de vida social. La ejecución de la pena se concibe como proceso de orden que toma continuamente en cuenta la intervención del delincuente, teniendo en cuenta la mejoría y el grado de resocialización del victimario se podría medir como será regulada la participación de éste y la ejecución de la norma.

Según las normas Alemanas (Constitución Alemana, art. 20, 28), no existe una pena establecida como tal, sino que emerge de las discusiones y acuerdos a los que llegan los intervinientes de un proceso, esto constituye una sentencia y una doctrina que esté alineada no sólo a los principios del Estado de Derecho y del Estado social, sino también a las exigencias de un Estado democrático, como postula la basada en la idea de un Estado democrático y social de derecho.

Analizar la función del derecho penal, es preguntarse por la función de sus consecuencias jurídicas específicas: la pena y las medidas. Pero Mir Puig (1982), se refiere al acierto de Calliess:

(..) al remitir a la necesidad de basar la investigación de esta función en el derecho positivo, lo que muy frecuentemente resulta desatendido. Más corriente que indagar

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

qué función cumplen las sanciones penales en el concreto derecho positivo de que se trate, es inquirir por la función que se estima deberían cumplir. (pags 76 en adelante).

Solamente utilizar la norma no es la solución o el acierto para resocializar al individuo infractor a la sociedad, porque solo la ley se refiere al cumplimiento de un proceso y no al sujeto ni activo ni pasivo dentro del derecho penal.

Por otra parte, la teoría de los fines de la pena se origina dentro de la jurisprudencia jurídico-positiva. Dentro de esta teoría si existiese una reforma a la norma penal, se debe guiar por la tendencia tradicional del derecho, sin despreciar la resocialización del individuo a pesar de que pueda recibir muchas criticas en cuanto a esta postura legal.

La función de la pena y las medidas de seguridad son incuestionables para el impugnado por cuanto, la norma debe aplicarse tal cual lo establece y se debe cumplir; porque el derecho positivo debe encaminarse a que el infractor reciba una sanción, porque su conducta le da la capacidad de entender la infracción cometida, creando la seguridad y la confianza en la función de la pena como tal, la cual emerge únicamente del derecho positivo.

Frente a esta teoría se le debe mirar con un enfoque abierto, sin perjuicio de lo que el fin de la pena tiene desde su dogma y jurisprudencia histórica-legal. No se trata de desvirtuar esta norma, sino de procurar unificarlas a la luz del fin de la pena, frente a la connotación del delito cometido sin desvincular al individuo como parte de un proceso de

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

resocialización, lo cual es muy poco entendido en la dogmática jurídico-histórica de la criminalística desde sus inicios.

La función del derecho penal es de doble vía, se enfoca en primera medida únicamente en su función y en el procedimiento penal, la segunda es buscar solo en la norma una concordancia de acuerdo al tipo de sanción que el legislador imponga sobre el derecho positivo, es decir en razón al ordenamiento jurídico estatal.

En la revisión histórico-penal sobre las doctrinas, teorías y escuelas se puede observar que no hay una unidad sobre la filosofía legal de la pena incluso se encuentra que para su época no era clara la dirección doctrinal porque se hicieron llamar con esa denominación como escuela clásica y no había claridad sobre la esencia del derecho penal diferente a lo ya conocido como derecho positivo.

Mir Puig (2003), menciona un fundador de la escuela positivista, A. Ferri; el cual influyó con teorías y pensamientos relacionados con la racionalización del individuo y la pena. Para uno de los fundadores de esta escuela no podría hablarse de la norma en su objeto positivista únicamente, porque la norma podría ser usada más en sentido preventivo que sancionatorio, lo cual es contrario a todo lo realizado por el derecho penal Alemán y la autodenominada escuela clasista; para esta teoría de la racionalidad y resocialización de la pena, el individuo debía evidenciar cambios psicológicos y sociales que permitieran dar a la pena el sentido de un cambio individual y social.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Por eso el derecho moderno las vuelve a clasificar como teorías absolutas y teorías relativas del derecho penal, porque sus conceptos son polos opuestos y no existe un termino de equilibrio en estas dos escuelas en donde predomina la antagonia alemana del ordenamiento jurídico basado en el derecho positivo y la agrupación de diferentes corrientes y teorías basadas en Ferri sobre la resocialización de la pena.

A parte de lo anterior, aparece una corriente filosófica sobre las libertades del individuo y su libre albedrio, lo cual produce una minima unión de teorías y conceptos sobre la metodología de análisis y deducción direccionado por el derecho positivo. Sin embargo, la diferencia en estas dos corrientes sigue siendo la misma, inclinada una al derecho ideal racional y la otra al derecho penal positivo.

Al analizar la postura de ambas escuelas, no se puede negar la función del positivismo jurídico muy a pesar que el derecho natural, encierra al individuo como el objeto principal; en este orden de ideas, el sentido del racionalismo histórico-positivo no es otra cosa que sancionar al infractor con una pena, tal cual lo establece la norma.

De otra parte, Mir Puig (2003), señala a Francesco Carrara, en quien culminó el clasicismo, escribía en los prologos de su Programa: *El derecho penal tiene su génesis y su forma en una ley absoluta, porque constituye el único orden posible de la humanidad según las previsiones y la voluntad del Creador.* Y añadía:

...las demostraciones no se derivan de la palabra humana, sino que deben ser deducciones lógicas de la razón eterna, por la cual reveló Dios a los hombres, por admirable inspiración, cuanto es menester para regular su conducta con respecto a los

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

propios semejantes. Subordinadas así a una norma absoluta, las leyes penales son absolutas en sus principios cardinales, y sólo pueden convertirse en relativas en su forma de aplicación.

Dado lo anterior, el derecho penal surge por designios del creador y que fue creado para armonizar las relaciones entre la creación de Dios y estas leyes deben aplicarse de acuerdo a la conducta en forma absoluta o relativa de acuerdo al comportamiento del individuo, reglamentadas dentro de la doctrina religiosa; en la que Dios es el creador del universo y todo debe hacerse según su señorío.

Aunque Carrara de acuerdo a Mir Puig (2003), adoptó la versión católico-tomista y el propio de la naturaleza del ser humano y anterior a cualquier derecho establecido, racionalista característico de la ilustración donde el recurso al derecho natural tenía en la escuela clásica un sentido político liberal inequívoco. El sistema ideal a que el método racional condujo, tuvo el sentido de las expectativas que podrían cumplirse dirigido al legislador, quien había de encontrar en él los límites necesarios a la libertad del ciudadano.

Así mismo, Mir Puig (2003) indica al autor Antón:

La escuela clásica del derecho penal surgida de la filosofía de la Ilustración, va unida en todas partes al liberalismo político. Los derechos del hombre imponen: el legalismo, o sea que la ley regule detalladamente la función punitiva para que el individuo quede a cubierto de las arbitrariedades de los jueces; y el humanitarismo, esto es: la pena debe limitarse a lo estrictamente necesario, e incluso en muchas ocasiones se dejó sacrificar la necesidad a motivos sentimentales.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Precisamente había de ser esta orientación liberal la que daría ocasión a la escuela positiva a culpar a la clásica de haber perdido de vista las necesidades sociales de prevención y haber fracasado, por ello, frente al considerable aumento de la criminalidad y de la reincidencia. Tal crítica no era más que un reflejo particular donde afirma que "los clásicos, desde César Beccaria, pretenden mediante un método lógico abstracto, deductivo, atacar el derecho penal del Antiguo Régimen denunciando su inhumanidad, la crueldad de las penas, la tortura, la incriminación de hechos que no deberían constituir delito, y consiguen que esas ideas penetren en la legislación inaugurando el derecho penal moderno:

Pero sería injusto para el liberalismo y para la escuela clásica atribuirles la aparición de los problemas que en todos los terrenos se hicieron evidentes a fines del pasado siglo y principios del presente. Concretamente, el aumento espectacular de los índices de criminalidad que delatan en esa época las estadísticas, obedeció antes que nada a las dificultades de adaptación de amplias capas de la población a las nuevas y duras condiciones de la sociedad industrial que surgía. Sería ingenuo creer que la lucha contra las secuelas de un sistema económico-social puede ser asumida con éxito por el derecho penal y sobre todo, sería inadmisible políticamente pensar que tal lucha debe llevarse a cabo a expensas solamente de quienes manifiestan dificultades de adaptación al sistema, castigándolos o sometiénolos a medidas de seguridad. La solución eficaz y lícita es otra: evitar, por medio de los instrumentos políticos generales, que el sistema dificulte hasta tal punto una vida social pacífica, que provoque un aumento de la inadaptación social y de la delincuencia en extendidos sectores de la comunidad, por lo general los menos favorecidos económicamente,

contemplado por Mir Puig (2003).

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Analisis y discusion

No es de extrañar que existan posturas en contra del delito de inasistencia alimentaria teniéndose en cuenta que si bien, registra una cantidad importante de denuncias, con la aplicación de la pena, es decir, con la privación de la libertad del responsable de la obligación alimentaria, en muchas ocasiones no se satisface la obligación y por el contrario se genera un impedimento para el cumplimiento de la misma. Al respecto se indica:

Por otro, el hecho de condenar a un sinnúmero de personas como deudores alimenticios, sin saber si pueden serlo verdaderamente o no, genera un efecto funcional consistente en liberar al Estado de su obligación constitucional de subvenir a las necesidades alimentarias de la población, cuando las personas inicialmente llamadas a pagar, en virtud legal, se encuentran en imposibilidad de hacerlo. (Moya, 2008, pág. 56)

Sin embargo, en el proceso penal pese a que está contemplada la conciliación no cumple con su propósito, ni brinda las garantías esperadas a la víctima, teniendo en cuenta que la conciliación busca archivar la investigación indicando bajo qué condiciones se realizará el pago de la obligación pero sin referirse a los perjuicios que ocasionaron la denuncia, a pesar de llegar a un acuerdo en las cuotas que debe pagar, el implicado vuelve a incumplir reincidiendo en su accionar; es ahí donde se continua en la lesión, pues la victima se encuentra con problemáticas para efectivizar el pago de la obligación y no puede hacerlo por falta de una obligación clara, expresa y exigible en el acta suscrita (Ahumada, 2011).

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Por otra parte, para que el cumplimiento de las obligaciones alimenticias en cuanto a los hijos menores de edad, como lo establece el artículo 129 del Código de la Niñez y la Adolescencia determina que los jueces están obligados a tomar las medidas necesarias para lograr el cumplimiento anterior, y ordenar la incautación, secuestro, valoración y subasta de los bienes o derechos de los acreedores de conformidad con la ejecución. Se implementan las disposiciones de los procedimientos. Además, la cláusula anterior también estipula la prohibición de salir del país sin cumplir con la normativa, de la siguiente manera: Cuando existe información de que la persona obligada a proveer alimentos se encuentra en mora con la cuota de alimentos por más de un mes, el juez conoce o ya conoce el proceso de procesamiento de alimentos. El juez notificará a las autoridades competentes de la orden para impedirle salir del país hasta que cumpla con sus obligaciones y garantice claramente su compromiso, de lo contrario se reportará en las centrales de riesgo. (Ley N ° 1098 de 2006).

Según Moya Vargas (2008), la norma se refiere a las condiciones que deben existir para que la autoridad competente pueda proferir sentencia condenatoria por el delito de inasistencia alimentaria en Colombia, es necesario contar con elementos probatorios que indiquen los supuestos subjetivos del tipo penal, es decir la existencia de una relación condicional donde se pruebe el vínculo que los relacione; otro elemento que se debe contemplar la necesidad concreta de quien solicita los alimentos y su incapacidad de autosatisfacerlos; finalmente, es necesario tener en cuenta la capacidad económica del implicado, para lograr una cuota alimentaria que provea las necesidades específicas que tiene el solicitante.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

También se debe demostrar que, en vista de lo anterior, el deudor decide libremente no pagar, lo que significa su comportamiento fraudulento, es decir, sabiendo que debe pagar, decide no pagar. Una vez comprobado el pago pendiente, se debe probar que el incumplimiento no estaba justificado. A su vez, el bien legal protegido, la familia, corre al menos el riesgo de sufrir algún tipo de daño ilegal (Moya Vargas, 2008). Los delitos relacionados con la obligación alimentaria tienen como objetivo proteger las familias y la integridad de la carga de ingresos mencionada anteriormente.

De acuerdo a la investigación sobre el tipo penal de la inasistencia alimentaria, existen muchos procesos en diferentes etapas donde incluso se observan, que a pesar de existir en muchos sentencias condenatorias, los sancionados siguen incumpliendo el pago de la obligación. En ocasiones hacen ciertas negociaciones por fuera de ley, incurriendo en una desestimación de la autoridad competente, alegando la existencia de un sinnúmero de tramites en los juzgados que alargan el tiempo de las decisiones judiciales pertinentes. Es necesario aclarar que la inasistencia es de doble vía, se hace necesario lo material, educación, nutrición y salud y al mismo tiempo, formación en valores con respecto al acompañamiento, amor y orientación, lo cual genera un desarrollo integral en el individuo.

Lo más particular es que se trata ciertamente de un delito que genera un número bastante alto de sentencias condenatorias, pero no fruto de una juiciosa y estricta actividad jurisdiccional, sino de preconceptos que desafían toda racionalidad jurídico-penal. Y acaso lo que más atrajo la atención de los investigadores, es que, pese a todo, la indiferencia social es lo más alarmante si se estima que, de ser cierto que es un delito tan frecuente, se

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

conviviría tranquilamente con un permanente atentado contra uno de los bienes jurídicos más estimados por la estructura social, sin que ello desatara reacción alguna.

En el Código Civil, existe una diferencia sobre la obligación alimentaria y la regulación de la misma, esta norma no es clara y expresa sobre la prescripción a este derecho de velar o mantener a los hijos y vulnerables en el cual es imposible alegar su extinción, sin embargo si pueden terminar las pensiones causadas, que han sido reconocidas por un juez.

Por otra parte, cuando hay atraso o incumplimiento de estas pensiones el mismo Código, describe en que casos cesa la obligación como por ejemplo: a) negarse o beneficiar, y el derecho de demandarlas; b) heredar por causa de muerte, venderse y cederse, sin perjuicio de la prescripción que compete al deudor; es decir, se podrá alegar la prescripción de las cuotas alimenticias atrasadas, pero no del derecho a pedir alimentos. (Badillo. 2019).

El artículo 133 del Código de la Infancia y de la Adolescencia (L. 1098/06), enmarca la alternativa de fundamentar la prescripción extintiva por parte del infractor alimentario ya regulado y causado, no solo se encuentra en el Código Civil, sino también en el Código del Menor y en el Código de la Infancia y de la Adolescencia, donde ordena:

Sin embargo, al regularse en el derogado artículo 152 del Código del Menor que la demanda ejecutiva de alimentos provisionales y definitivos se adelantará sobre el mismo expediente, en cuaderno separado, por el trámite ejecutivo de mínima cuantía en el cual no se admitirá otra excepción que la de pago, y, de manera similar, al estimarse en el numeral 5° del artículo 397 del Código General del Proceso que, en las

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

ejecuciones de que trata este artículo, solo podrá proponerse la excepción de cumplimiento de la obligación, se ha considerado que no se podrá alegar la excepción de prescripción extintiva respecto del cobro de cuotas alimentarias causadas. (Badillo, 2019),

La prohibición que no sea el pago por incumplimiento de la obligación de alimentos podría ser avalada si existía con un acuerdo de pago provisional, la cual se mantenía en la sentencia judicial del proceso adelantado. Hay que tener en cuenta que esto no ocurre, cuando hay un decreto de un juez de la república o en los casos en que se negocia un arreglo de partes de forma privada entre los afectados. Sobre estos casos la Corte ha proferido algunas sentencias a saber:

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 17 de noviembre de 1999 (CSJ, S. 1999), citada en la sentencia de 12 de agosto del 2015, de la misma corporación (CSJ, S. 2015) manifestó: “Esta Corte ha dicho sobre el particular: “(...) según esta sentencia se aplica la demanda ejecutiva sobre el mismo proceso en archivos separados, es decir: ‘La demanda ejecutiva de alimentos provisionales y definitivos, se adelantará sobre el mismo expediente, en cuaderno separado...’. Lo que significa que las cuotas son fijadas por el juez de familia o juez municipal donde el menor o afectado tenga domicilio, esto se dispone por la posibilidad de un proceso judicial contencioso, lo cual no debe entenderse como una negación de poder describir ciertas excepciones que fuesen diferentes al saldo económico, pudiendo en audiencia de conciliación acordar otro tipo de especie o bienes materiales ante un funcionario administrativo, por ejemplo la Defensoría o Personería Municipal.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Posteriormente, mediante la Sentencia STC10699-2015 del 12 de agosto del 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, cambió de postura. En esta sentencia se determinó la indiferencia de donde se originó el pago por proceso ejecutivo y es posible realizar otras propuestas diferentes que pudieran equiparar el pago de la obligación. (CSJ, S. 1999),

En un apartado de la sentencia jurisdiccional la corte, manifestó:

“En el presente evento, en aras de salvaguardar los derechos del extremo pasivo en este tipo de juicios, se admitirá que, en todos los casos, sin importar el origen del documento pábulo del cobro judicial, es válido proponer excepciones de mérito diferentes a las de pago, efectuando una interpretación amplia del precepto 509 del Código de Procedimiento Civil, como pasa a explicarse”.

Quedaría un interrogante muy importante acerca de las situaciones de excepción para extinguir el pago de cuotas alimentarias, dentro del marco de un proceso ejecutivo podría no quedar claro cual es el tiempo para que exista una prescripción de esta cuota, según el artículo 2536 del Código Civil, que describe que la acción ejecutiva se prescribe por cinco años.

La alta corporación ha tenido varios enfoques en cuanto al pago de pensiones alimentarias. No hace ninguna diferencia para esta institución cual sea el origen del título valor que presta un proceso ejecutivo, los casos de excepción son para la protección de los menores, muy a pesar de que exista una prescripción de las personas que indica el artículo

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

2530 del Código Civil, entre ellas, los menores de edad, tal como lo señala el inciso primero del artículo 2541 del Código Civil. No obstante, es bueno precisar que dicha suspensión no puede durar más de 10 años.

En este orden de ideas, a lo que se refiere la corte es, a los términos legales que detienen las prescripciones en casos de excepción, podrían volver a activarse si el menor se convierte en adulto y cuando esta situación de la mayoría de edad no sobrepasa los 10 años de la solicitud, porque no se podría suspender el termino de la extinción de este derecho.

En el marco de la crisis que generó la aparición de la pandemia Covid 19, se han presentado preguntas frecuentes sobre como se debía afrontar los casos que se encuentran incurso en la Fiscalía General de la Nación, existiendo una incertidumbre en la forma en que el procedimiento que debe realizar por la cuarentena nacional determinada por la Presidencia de la República, lamentablemente esta situación no agiliza las transacciones que deben realizarse y los despachos deben revisar la puntualidad de cada caso; entendiéndose que en ningún momento se renuncia al derecho, pero se deberán analizar los casos en que la situación económica de los afectados puedan responder a este tipo de obligaciones sin que se desconozca los cambios en la economía y la sociedad actualmente.

Como en muchas situaciones legales, las situaciones imprevistas o de fuerza mayor no alcanzan a preveer el derecho o la norma; en el caso particular del COVID19, no existía un procedimiento regulatorio para responder ante los efectos judiciales en este caso considerado como una crisis mundial sin precedentes.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Por estos hechos, no existe un recurso en la Constitución Colombiana que dé vía libre a cesar, o al menos restringir el coste de procesos alimentarios de manera temporal en situaciones excepcionales e inesperadas como el actual. No hay la prudencia en la norma ni procedimental que cubra el cese del compromiso alimentario en el corto tiempo que de acceso a la Fiscalía General de la Nación, encargada para realizar acciones por el hecho de no tener atención presencial y de solo limitarse a los casos más extremos de violencia vía internet.

Por ejemplo: un padre debe pagar su pensión de alimentos pero ante la crisis presentada desde abril del presente año, esta suspendida y/o disminuida por lo cual se ve imposibilitado de cancelar en su totalidad la cuota fijada por el juzgado, porque su situación económica ya no es la misma. Según las proyecciones del gobierno la situación económica se regulará en no menos de dos años, pero la sentencia proferida por el juez de familia no podía haber tenido en cuenta estos factores presentados. No hay en el sistema judicial un proceso corto o expreso que permita reevaluar la sentencia ya ejecutoriada porque la norma ampara este derecho a quien le corresponde y realizar una modificación podría sustraer cambios de tipo modo, lugar por circunstancias ajenas a la voluntad del beneficiado, por lo tanto se tendrá en cuenta la situación económica del progenitor sin que este incumpla el pago de su obligación.

Se nota que por las circunstancias que ha originado la pandemia la legislación en cuanto a la inasistencia alimentaria ha quedado con grandes vacíos, se hace necesario una revisión exhaustiva de la autoridad competente en donde se pudiera enmarcar un procedimiento alternativo que considere situaciones de diferentes factores: económicas,

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

salud, estabilidad laboral, entre otras que pudieran adaptarse de manera temporal y reversible de acuerdo a una nueva realidad que se esta enfrentando, teniendo en cuenta la condición de la irretroactividad de la ley como protección en búsqueda de aplicar justicia; teniendo en cuenta las diferentes posturas y derechos en cada caso.

Muchas empresas se han visto obligadas o en la necesidad de despedir trabajadores ante la imposibilidad de operar o no poder acceder a los subsidios del Gobierno, sin la articulación empresarial que cubra o proteja la estabilidad laboral de forma inmediata que permita nivelar toda la estructura que depende de ellos. Nada estaba previsto a nivel mundial, ni tampoco los recursos para aplicar de manera efectiva las soluciones, ante la diversidad de empresas pymes o trabajo informal que existe en Colombia.

Dado lo anterior, se preveen actos desoladores ante la imposibilidad de los pagos reflejados en demandas de ejecución de sentencia, donde las situaciones sociales se agravan con el paso de los días ante la falta de recursos para el sustento de las familias y la nutrición de sus integrantes menores, desmejorando así su estabilidad y/o la de quienes, estando en situaciones lamentables que se han ido acrecentando por efectos de cuarentena y pandemia decidan proceder a una modificación del proceso, donde tendrá que esperar en un mediano plazo o suficiente tiempo judicial para garantizar la situación económica, todo dependiendo de la ciudad y la fecha a partir de la interposición de la demanda.

En este caso, según la investigación de Arrieta et al. (2019) en la ciudad de Barranquilla en los años 2015 al 2017 se realizaron conciliaciones dentro de los procesos instaurados en las instituciones correspondientes que la ubican a nivel nacional con una

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

muy baja participación a nivel nacional de audiencias, lo cual significa que hay inconformidad y una notoria ausencia de garantías en el aparato judicial por parte de los accionantes incluyendo al ICBF, el cual aparece como un ente burocrático y débil frente a situaciones de violencia intrafamiliar y protección a la niñez y adolescencia.

Anterior a los eventos de cuarentena y estado de emergencia se dieron pocas sentencias, que aceptaron causas inusuales como excusa para el no pago de manera concluyente y decisivo que impedía en realidad provisionar el pago. Lo anterior, tomado como una implicación del sistema a tener una acertada reacción ante la acreditación de dicho comportamiento y se tenga en cuenta al momento del arbitraje en las apelaciones por muchos que están obligados al pago.

Finalmente, es necesario que el legislador tenga en cuenta opiniones de algunos abogados especialistas en el tema, que han expresado una evaluación de la norma en donde se pueda evidenciar un mejoramiento de mayores elementos para el procedimiento en cuestión, donde se debería contar con jueces especialistas en el tema que puedan tomar decisiones mas resolutivas, mas efectivas y eficaces.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Conclusiones

La familia ha sido objeto de protección constitucional gracias a la normatividad colombiana e internacional, que la entiende como esencial en el desarrollo social, hasta el punto de que el delito de inasistencia alimentaria está incluido en la ley penal en Colombia protegido mediante un tipo penal. Es materia de discusión desde hace varios años por parte de académicos y autoridades competentes, a favor y en contra de reconocer este delito como prioritario en la protección de los derechos individuales de la familia. En derecho penal la familia ha alcanzado la categoría de bien jurídico, el cual protege la vulneración a cualquiera de sus miembros a través del tipo penal traído a colación en este trabajo, el de inasistencia alimentaria. De acuerdo a lo anterior, se considera que el castigo o pena es un derecho o garante constitucional.

Al hablar de penas alternativas se debe hacer referencia a la imagen de un derecho penal alternativo, donde se concibe un derecho transformador de los tejidos sociales, un derecho penal que cuida los derechos del infractor en diferentes aspectos y de todos aquellos que lo rodean. La pena de tipo carcelario era la última opción porque separaba a la familia y no aseguraba el cumplimiento del pago por parte del infractor.

Otro aspecto importante en cuanto al pago de alimentos es la situación de los que tienen derecho los hijos por la obligatoriedad de la filiación familiar, es diferente a la que podría existir hacia familiares cercanos que no tuviesen como mantenerse y pueda demostrarse; el procedimiento tampoco es el mismo porque el primero es un derecho de sangre y el segundo es un principio solidario con fundamento en un parentesco familiar.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Es importante detallar, que existen elementos propios establecidos por la Ley en cuanto a los que tienen derechos a la obligación de alimentos, esencialmente de padres a hijos que sean menores de edad y adultos mayores que no tengan modo alguno de mantener sus necesidades básicas, estos elementos son tenidos en cuenta cuando se solicita al juez que fije la cuota alimentaria además de, los ingresos propios y la convivencia en el mismo seno familiar; cuando se cumplen estos elementos aún sea cumplida la mayoría de edad los hijos podrán reclamar ingresos por parte de su progenitor, como lo establece el Código Civil.

Se hace necesario determinar, que existen dos tipos de gastos en la fijación de la cuota de alimentos, que son: los que son considerados ordinarios o básicos y los extraordinarios y congruos; los primeros son los que se realizan para sustentar las necesidades cotidianas y continuas; los segundos son imprevisibles y se justifican según la situación que se presente. De no existir un acuerdo entre los padres para la cuota del pago de carácter extraordinario será el juzgado que decida cuando debería ser el valor a cancelar por cada uno, sin embargo por la realidad del desarrollo de la vida en momentos se pueden confundir este tipo de gastos en el cual no pueden ser subordinados a la voluntad de las partes sino a las circunstancias y a la situación económica de cada progenitor.

Bibliografía

- Acosta R, KJ (2019). Discusiones en torno al delito de inasistencia alimentaria en Colombia. Artículo de Investigación. Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Colombia. Recuperado de: <https://1library.co/document/y6e9k3gz-discusiones-torno-delito-inasistencia-alimentaria-colombia.html>
- Ahumada, M. D. (2011). La conciliación: un medio de justicia restaurativa; análisis y reflexiones de su implementación en el delito de inasistencia alimentaria en Colombia. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 41(114), Enero-junio, 11-40. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rfdcp/v41n114/v41n114a01.pdf>
- Arrieta, M. y Meza, A. (2019). Efectividad de la función de concreción de la obligación alimentaria de los defensores de familia en la ciudad de Barranquilla entre los años 2015 y 2017/ Effectiveness of delimitation of the function of food support of family defenders in the city of Barranquilla between 2015 and 2017. Revista Jurídicas, 16 (2), 147-165. DOI: <https://doi.org/10.17151/jurid.2019.16.2.10>
- Badillo A., F. (2019). La prescripción de las obligaciones alimentarias. , 25 octubre. Legis Ambito Juridico. https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/civil-y-familia/la-prescripcion-de-las-obligaciones-alimentarias#_ftnref1.

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Barbosa Castillo y Gómez Pavajeau, G. y. (1996). Bien jurídico y derechos fundamentales.

Sobre un concepto de bien jurídico para Colombia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Bechara Llanos, A. (2018). Investigación-acción-jurídica: escenarios para una investigación activa y crítica en el Derecho. JURÍDICAS CUC, 14(1), 211-232. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.10>

Bernal, C.; La Rota, M. (2012). El delito de inasistencia alimentaria: Diagnóstico acerca de su conveniencia. Obtenido de Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_260.pdf

Birnbaum, J. (1834). Über das Erfordernis eines Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens mit besonderer Rücksicht auf den Begriff der Ehrenkränkung.

CSJ, S. Civil, Exp. 76246, nov. 17/99, reiterada en los fallos del 10 de octubre del 2012, Exp. 00104-01, y del 6 de agosto del 2013, Exp. 2013-0271-01.

CSJ, S. Civil, Exp. STC10699, ago. 12/15, M. P. Luis Armando Tolosa Villabona.

Carbonnier, Jean (1991), Derecho Civil, Relaciones Familiares y Cuasi Familiares, Traducido por Zorrilla Ruiz, M, Barcelona, España, Editorial Bosch, t1, Vol. 2.

Carbonell, J; Carbonell, M y González Martín, N (2012). Las Familias en el siglo XXI: Una mirada desde el Derecho Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto de

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

investigaciones jurídicas. Serie: Estudios Jurídicos, Núm. 205. Coordinadora México.

Editorial: Elvia Lucía Flores Ávalos.

Código Civil Colombiano (1887). Ley 57 de 1887. Arts. 411-427 (Colombia).

Código de la Infancia y la Adolescencia (2006). Ley 1098 de 2006. Arts. 24, 41 numerales 10 y 31, arts. 82, 86, 100, 104, 111 y 129-136. (Colombia).

Código Penal Colombiano (2000) . Ley 599 de 2000. Modificado por el Artículo 1 de la ley 1181 de 2007 Arts. 435 numeral 3, art. 442, 443 numeral 2, art. 444, 448 y 498. 24 de julio de 2000 (Colombia).

Congreso de la República (2004). Ley 906. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004). 31 de agosto.

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario Oficial N° 46.446. Bogotá, D.C, miércoles 8 de Noviembre de 2006.

Colombia. Corte Constitucional. (1992) Sentencia T-502. 21 de agosto MP Alejandro Martínez Caballero.

CONPES. (2008) Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN). Documento No 113. Bogotá: CONPES. Vol. 113. Recuperado el día 6 de octubre de 2019. De: <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/POLÍTICA%20NACIONAL%20DE%20SEGURIDAD%20ALIMENTARIA%20Y%20NUTRICIONAL.pdf>

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

FAO, CEPAL & PMA. (s.f.). Hambre y cohesión social. Cómo revertir la relación entre inequidad y desnutrición. Recuperado el día 6 de octubre de 2019, de la página Web FAO: <http://www.fao.org/docrep/010/ah926s/ah926s00.HTM>.

Ferro, José. (2011). Lecciones de Derecho Penal Parte Especial. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

García, É. G. (2006). Teoría de los bienes jurídicos. Bogotá, D.C. Editorial Ibáñez.

Hormazábal Malarée, H. (1991). Bien jurídico y Estado social y democrático de derecho (El objeto protegido por la norma penal). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, S.A. pág. 27.

Hegel, G.W.F. (1970) Grundlien der Philosophie des Rechts. Frankfurt Am., Suhrkamp.

Instituto Nacional de Salud. (2018). Boletín Epidemiológico. Obtenido de Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública: <https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2042.pdf>

Lacruz, José Luis, Manual de Derecho Civil, Barcelona, España, Bosch, 1979.

Martínez, A. G. (2009). Facultad de Educación y Humanidades de Melilla; Sociología de la educación. Recuperado el 7 de octubre de 2019, de: http://www.ugr.es/~aguevara/SOCIOLOGIAso_archivos/Tema4.pdf

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Medina Pabón, J. E. (2010). Derecho Civil. Derecho de Familia (Segunda ed.). Bogotá: Universidad del Rosario.

Milanese, P. (2007). Revista electronica de Doctrina y jurisprudencia en linea. Agosto 1. Obtenido de Derecho Penal Online: <http://www.derechopenalonline.com>

Mir Puig, Santiago (2003): Introducción a las bases del derecho penal (Montevideo-Bs. Aires B de F, segunda edición, ISBN: 9789871089024

Montesinos, R. (1996). Vida cotidiana, familia y masculinidad. Revista del departamento de sociología, Universidad Nacional Metropolitana. Año 11, vol. 31, págs. 1-16.

Moreno R, Sandra P. (2018). El delito de Inasistencia Alimentaria: Un Análisis Teleológico de la pena (Tesis de maestría en derecho penal). Universidad Santo Tomás. Bogotá, D.C. Recuperado de <http://docplayer.es/180987996-Universidad-santo-tomas-facultad-de-derecho.html>

Moya Vargas, M. F. (2008) La transvaluación: su posibilidad como categoría de análisis en la investigación sociojurídica. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 2(1), 33-68. Recuperado de https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/articloe/view/890/917

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Pabón Arrieta, J. (2018). Notas acerca de la Democracia en Norberto Bobbio. JURÍDICAS CUC, 14(1), 9-28. <https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.01>

Pabón, P. (2003). Delitos Contra la Familia. Bogotá: Doctrina y Ley Parra, J. (2008). Derecho de familia. Bogotá: Temis.

Planiol, Marcel y Ripert, Georges Tratado Elemental de Derecho Civil, Traducido por José M. Cajica. Edición IV. Editor Cárdenas Editor y Distribuidor, 1981. ISBN 9684010486, 9789684010482

Restrepo-Yepes, Olga Cecilia. (2011). La protección del derecho alimentario en Colombia: descripción y análisis de las políticas públicas sobre alimentación y nutrición desde 1967 a 2008. Revista Opinión Jurídica, 10(20), 47-64. Retrieved October 07, 2019, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-25302011000200004&lng=en&tlng=es.

Roxin, C. (1997). Derecho Penal: Parte General, fundamentos, teoría del delito. Madrid: Editorial Civitas.

Semana (2017). Inasistencia alimentaria: A ¿Sin cárcel?. Semana.com. Últimas Noticias de Colombia y el Mundo. Sección Nacion 17 mayo. <https://www.semana.com/nacion/articulo/inasistencia-alimentaria-avanza-en-debate-en-el-congreso/525544/>

APLICACIÓN DEL TIPO PENAL EN LA INASISTENCIA ALIMENTARIA

Sampieri, Roberto (2018). Metodología de la investigación. McGraw-Hill. Cuarta edición. 2006.
p.3-26.

Torres, (2011). Violencia intrafamiliar inasistencia alimentaria e incumplimiento de cuotas de alimentos aplicación de la Ley 311 de 1996 en empresas e instituciones de Medellín. Sistema de información para la seguridad y convivencia semillero en derecho de familia. Medellín, Colombia, pg 544.

Zota Bernal, Andrea Catalina (2016) Inasistencia alimentaria: una aproximación desde la justicia interseccional. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Pág. 10.